

Septiembre 5 de 1947

39ª REUNION — 34ª SESION ORDINARIA

Presidencia del doctor JUAN HORTENSIO QUIJANO, vicepresidente  
de la Nación, y del contraalmirante (R.) ALBERTO TEISAIRE,  
presidente provisional del Honorable Senado

Secretarios: señores ALBERTO H. REALES y SANTIAGO A. JOB

SENADORES PRESENTES:

AMELOTTI, Osvaldo  
ANTHLE, Armando G.  
AVENDAÑO, Arcadio B.  
BASALDUA, Juan Carlos  
BUSQUET, Alfredo  
CRUZ, Luis  
DURAND, Alberto  
FIGUEIRAS, Demetrio  
GOMEZ DEL JUNCO, Felipe  
GOMEZ HENRIQUEZ, Samuel  
LAZARO, Juan Fernando de  
LORENZON, Ricardo Octavio  
MARTINEZ, Ramón Linidor  
SAADI, Vicente Leonides  
SOLER, Lorenzo (h.)  
TANCO, Miguel A.  
TASCHERET, Oscar  
TEISAIRE, Alberto  
VALLEJO, César  
ZERDA, Justiniano de la

AUSENTES, EN MISIÓN ESPECIAL:

BAVIO, Ernesto F.  
HERRERA, Julio  
LUCO, Francisco R.  
MOLINARI, Diego Luis  
RAMELLA, Pablo A.

AUSENTE, CON LICENCIA:

SOSA LOYOLA, Gilberto

AUSENTES, CON AVISO:

ARRIETA, Alfredo J. L.  
MATHUS HOYOS, Alejandro

SUMARIO

1.—Asuntos entrados:

- I.—Comunicaciones de la Honorable Cámara de Diputados.
- II.—Comunicaciones de la Presidencia del Honorable Senado.

III.—Comunicación particular.

- 2.—Proyecto de comunicación del senador Busquet y otros senadores sobre importación de plantales de porcinos de tipo bacon, de Canadá o del Reino Unido. A moción del senador Busquet se resuelve tratarlo sobre tablas.
- 3.—Proyecto de comunicación del senador Vallejo por el que se solicita al Poder Ejecutivo la remisión del estudio y proyecto sobre modificación de la ley 845, de pesas y medidas. A moción de su autor se resuelve tratarlo sobre tablas.
- 4.—Proyecto de ley del senador Tascheret por el que se declara monumento nacional la casa donde vivió Domingo Faustino Sarmiento, ubicada en la calle Sarmiento N° 1251 de la Capital Federal.

5.—Asuntos entrados:

IV.—Despachos de comisiones.

- 6.—Consideración del proyecto de comunicación a que se refiere el número 2 del sumario. Se aprueba.
- 7.—Consideración del proyecto de comunicación que se refiere el número 3 del sumario. Se aprueba.
- 8.—Consideración del despacho de las comisiones de Obras Públicas y de Presupuesto, Hacienda y Finanzas en el proyecto de ley de los senadores Basaldúa y Lorenzón por el que se autoriza al Poder Ejecutivo a invertir hasta la suma de \$ 20.000.000 en la construcción de un canal directo y camino lateral en la provincia de Entre Ríos. Se aprueba.
- 9.—Consideración del despacho de las comisiones de Instrucción Pública y de Previsión en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se establece el estatuto del docente de los establecimientos privados.

10.—A moción del senador Durand, se resuelve pasar a un breve cuarto intermedio.

11.—Continúa la consideración del despacho a que se refiere el número 9 del sumario. Se aprueba con modificaciones.

12.—Proyecto de ley de los senadores Teisaire y Busquet, sobre construcción de un camino de hormigón entre General Madariaga y Mar de Ajó, en la provincia de Buenos Aires.

13.—A moción del senador Vallejo, se resuelve tratar el proyecto de escalafón del personal del Honorable Senado.

14.—Consideración del despacho de la Comisión de Presupuesto, Hacienda y Finanzas en el proyecto de ley del senador Martínez y otros senadores por el que se establece el escalafón para el personal del Honorable Senado. Se aprueba con modificaciones.

15.—Apéndice:

I.—Sanciones del Honorable Senado.

II.—Comunicaciones al Poder Ejecutivo.

III.—Inserciones.

—En Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre de 1947, siendo las 13 y 40, dice el:

**Sr. Presidente.** — Queda abierta la sesión con la presencia de diecinueve señores senadores.

## I

### ASUNTOS ENTRADOS

**Sr. Presidente.** — Se va a dar cuenta de los asuntos entrados.

## I

### Comunicaciones de la Honorable Cámara de Diputados

Enviando proyecto de ley en revisión sobre creación de la Dirección General de Lucha contra las Enfermedades Cardiovasculares, como organismo dependiente de la Secretaría de Salud Pública. (A las comisiones de Salud Pública y de Presupuesto, Hacienda y Finanzas.)

—Enviando proyecto de ley en revisión destinando la suma de \$ 20.000.000 para combatir las enfermedades infectocontagiosas en todo el país, construcción y habilitación de un hospital para niños para enfermedades infecciosas y la instalación de un Instituto de Heine-Medin. (A las comisiones de Salud Pública y de Presupuesto, Hacienda y Finanzas.)

## II

### Comunicaciones de la Presidencia del Honorable Senado (1)

**Sr. Secretario (Reales).** — La Presidencia, con fecha 4 de septiembre de 1947, comunicó al Poder Ejecutivo la sanción de las siguientes leyes: 13.008, intervención a la provincia de Corrientes; 13.009, subsidio de \$ 10.000 a la familia de cada uno de los tripulantes y pescadores muertos o desaparecidos en las inmediaciones de los puertos de Mar del Plata, Madryn y Quequén en los años 1946 y 1947.

## III

### Comunicación particular

Doña Laura Ramírez Calderón de Richelet y María Susana, María Luisa, y María del Carmen Raffo, solicitan pensión. (A la Comisión de Peticiones y Poderes.)

## 2

### IMPORTACION DE PLANTELES DE PORCINOS DEL TIPO BACON, DE CANADA O DEL REINO UNIDO. — PROYECTO DE COMUNICACION DEL SENADOR BUSQUET Y OTROS SENADORES.

#### Proyecto de comunicación

*El Honorable Senado de la Nación*

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Agricultura o por las reparticiones que corresponda, ordenara:

1º — La importación de planteles de porcinos aptos para la producción del tipo bacon, de Canadá o del Reino Unido.

2º — Se experimente con las razas que ahora se explotan en el país, pues quizá servirían al objetivo propuesto.

3º — Hacer una propaganda adecuada y ofrecer una remuneración atrayente.

4º — Apoyar las etapas iniciales y aun las sucesivas con un régimen de crédito generoso.

5º — Se toman medidas a efectos de establecer mediante el fijado de tonelajes y precios en los nuevos convenios de exportación y la oficialización de la clasificación y tipificación de la carne, un equilibrio correlativo entre los valores de la exportación y los costos de producción.

*Alfredo Busquet. — Vicente Leonides Saadi. — Osvaldo Amelotti. — Alejandro Mathus Hoyos. — Alberto Durand. — Miguel A. Tanco. — César Vallejo. — Ricardo Octavio Lorenzón. — Felipe Gómez del Junco. — Arcadio B. Avendaño.*

(1) Ver apéndice.

kilómetros en línea recta y a unos 120 kilómetros por la vía actual; es el puerto de embarque de la inmensa riqueza de esa zona entre-riana considerada la de tierras más fecundas para la agricultura y de campos insuperables para la ganadería. Con dos o tres cifras, el Honorable Senado podrá apreciar el valor de este aserto. En el último quinquenio, Victoria ha enviado a Rosario la cifra extraordinaria de 250.542 cabezas de ganado vacuno, es decir, un promedio mensual de 4.000 cabezas; de esos 60 meses sólo en 38 fué posible la navegación con chatas de hacienda y barcos de carga, en los 22 meses restantes, o sea un porcentaje de tiempo del 36,6 % las bajantes del Paraná o los escollos naturales de los riachos impidieron la navegación, permitiendo sólo el transporte de hacienda por arreo entre imposibles caminos de islas.

En la última década, salieron por el puerto de Victoria 280.371 toneladas de mercaderías, cereales, yerba canchada, cueros, lana, etcétera; en ese mismo tiempo se importaron por dicho puerto 133.231 toneladas, cifras éstas que revelan en sí su importancia y que sirven para confirmar la necesidad que Entre Ríos tiene de descongestionarse de sus productos, ya que el 67,79 % de ese total de toneladas salieron de mi provincia. Si el Honorable Senado se informa que en esa década estuvo interrumpida la navegación durante 37 meses o sea el 30,83 % de dicho tiempo y que en estas cifras no figuran las miles de toneladas que salen en camiones por las balsas del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, podrá apreciar si la obra de canalización que hemos proyectado responde o no a los gastos de su ejecución.

Hace casi cincuenta años, señor presidente, que clamamos por esta obra, de abrir una ruta permanente de navegación entre Victoria y Rosario. El gobierno de la Nación está empeñado en un amplio programa de fomento industrial, pero él no podrá cumplirse en mi concepto íntegramente, si no se aprovechan con un concepto científico las rutas de navegación para poder agilizar la expansión económica de ciertas provincias.

Cuando uno escucha y lee casi permanentemente el clamor y el anhelo de los hombres de la costa del Paraná, de la necesidad de abrir ese canal Mitre, cuya obra tan injustificadamente se posterga, y cuya omisión ha costado millones de pesos, porque el Paso de Martín García sólo permite que los barcos entren y salgan con media carga, se congestionan los puertos, se elevan los fletes, etcétera, uno piensa: ¿Qué podríamos decir nosotros de la situación angustiosa de vivir enbotellados en un riacho del Paraná, privados de navegar el 30 % de tiempo y con una enorme riqueza amontonada que no pueden aprovechar oportunamente otros pueblos argentinos?

Nosotros estamos convencidos, en la medida en que el aprovechamiento de esa ruta fluvial mejorará nuestras posibilidades económicas, que será una ruta indispensable para el comercio de esa zona Sur de Entre Ríos sobre el Paraná y fuera de ello será una ruta estratégica que nos vinculará a pocos kilómetros con arsenales militares, depósitos de combustibles, etcétera, situados en la otra banda del Paraná.

Pasados los tiempos en que las grandes obras que reclamaba la República necesitaban el visto bueno de las empresas extranjeras y el consentimiento de círculos que en las capitales o en los centros interesados retardaban por egoísmo o por conveniencias la solución de problemas fundamentales de los pueblos, los poderes de la Nación deben con urgencia reparar esa desidia censurable, entre las cuales se encuentra la obra que considera el Honorable Senado.

No necesito hacer otra referencia al pedir el voto favorable de mis colegas para el proyecto de ley que está considerando el Honorable Senado; pero sería de mi parte un acto de injusticia no mencionar en este instante el nombre de don Angel R. Piaggio, iniciador de la ruta que nos vincula a Rosario, que con tesón y sacrificios abriera hace cincuenta años. Destaco esta circunstancia para darle a mis palabras un sentido de reconocimiento, en este instante en que este octogenario ve concretar lo que fué una gran aspiración de su vida.

Solicito al Honorable Senado, que autorice la inserción de los datos estadísticos que presento en este acto, suministrados por el Ministerio de Obras Públicas.

—Asentimiento.

**Sr. Presidente.** — Habiendo asentimiento, así se hará. (1)

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el despacho en general.

—Se vota y resulta afirmativa.

—En particular, es igualmente aprobado.

**Sr. Presidente.** — Queda aprobado.

9

#### ESTATUTO DEL DOCENTE DE LOS ESTABLECIMIENTOS PRIVADOS

**Sr. Presidente.** — Corresponde considerar el despacho de las comisiones de Instrucción Pública y de Previsión Social en el proyecto del Poder Ejecutivo por el que se establece el estatuto del docente de los establecimientos privados contenido en el orden del día número 21.

**Sr. Gómez del Junco.** — Pido la palabra.

Solicito que este asunto sea girado nuevamente a la Comisión de Previsión Social, a fin

de hacer un estudio minucioso, por cuanto en este despacho se contempla solamente a los maestros de enseñanza particular o privada, es decir a los que prestan servicios en establecimientos que han estado comercializando con los diversos ciclos de enseñanza. Es así, que el dueño de la escuela particular, es el que se ha beneficiado, mientras que el humilde gremio de maestros se ha estado perjudicando.

Pero entiendo, señor presidente, que en la misma situación se encuentran los maestros municipales que prestan sus servicios en las distintas comunas de la República, que se ven obligadas por la insuficiencia de sus recursos, a pagar sueldos miserables, tan miserables como los que perciben los maestros de la enseñanza privada. En la misma situación se encuentran también los maestros de algunas provincias.

Por estas consideraciones, entiendo que sería conveniente que el proyecto vuelva a comisión, para ver si es factible incluir en él a todo el magisterio, para dar de una vez una solución definitiva a este problema, a fin de que los maestros puedan enseñar mejor y gozar de mejores emolumentos.

**Sr. Cruz.** — Pido la palabra.

Yo me voy a oponer a la proposición formulada por mi colega por la provincia de Córdoba, doctor Gómez del Junco, teniendo en cuenta que este proyecto de ley, que figura en el orden del día número 21, debía ser tratado en la sesión de hoy, para lo que se formuló la correspondiente moción de preferencia. Además, tengo entendido que el despacho de la comisión ha sido hecho previa consulta con los señores ministros de Justicia e Instrucción Pública y de Hacienda.

A la vez se había girado a la Comisión de Previsión Social a mi juicio había sido mal girado ya que debió haber sido despachado por la Comisión de Instrucción Pública. Por esas razones, y considerando también que este proyecto fué tratado en el bloque de senadores, hago moción para que se considere en la sesión de hoy.

**Sr. Gómez del Junco.** — Pido la palabra, para aclarar un concepto. Aquí en el despacho, en el capítulo 4º, se dice expresamente: «Consejo Gremial de Enseñanza Privada»; vale decir, que el asunto tuvo que ser enviado a la Comisión de Previsión Social y a la de Trabajo, y no tiene razón el señor senador para manifestar que el proyecto ha sido mal girado a la misma, cuando es allí donde comenzó el estudio del proyecto.

**Sr. Vallejo.** — Pido la palabra.

Tal vez el señor miembro informante de la comisión pueda aclarar los puntos que encuentra dudosos el señor senador por Córdoba. Indudablemente, si en el estudio que se ha hecho en la comisión, no se hubiera contemplado la situación a que se refiere el señor senador, yo lo acompañaría con mucho gusto en su pedido, tanto más cuando un senador declara que no

ha tenido tiempo suficiente para estudiar detenidamente el proyecto. Pero si eso puede ser subsanado con una aclaración del señor miembro informante, creo que no habrá inconveniente para que el Senado lo trate en la sesión de la fecha.

**Sr. Soler.** — Pido la palabra.

El estudio del proyecto que vamos a tratar en la sesión de hoy ha sido realizado en forma bastante prolongada, y hace más de un año que se está hablando del estatuto del personal docente particular en la Cámara de Senadores.

El proyecto ha sido girado, efectivamente, a las comisiones de Instrucción Pública y de Previsión Social, y yo creo que, en realidad, con mayor razón, pudo haber sido girado a la Comisión de Instrucción Pública y a la de Presupuesto, Hacienda y Finanzas. La Comisión de Previsión Social, en realidad, tiene muy poco que hacer en este proyecto. Se trata de un proyecto de Instrucción Pública y de la forma de financiar el problema del mismo en cuanto al pago del personal docente privado. Aquí no se trata ni de jubilaciones, ni de retiros, ni de pensiones, que es la parte que debe corresponderle a la Comisión de Previsión Social...

**Sr. Gómez del Junco.** — ¿Y el capítulo 4º?

**Sr. Soler.** — Por supuesto, que todos los problemas pueden tener correlación con todas las comisiones de la Cámara; por ejemplo, las actividades del profesor y maestro tienen relación con la Comisión de Trabajo, y no por esto vamos a enviar el proyecto a dicha comisión; también se van a jubilar, y no por eso vamos a girarlo a la de Previsión Social. Pero creo que eso no es óbice para que hoy tratemos el proyecto, máxime cuando ya tuvo entrada hace dos días y se pidió preferencia para ser considerado en la sesión de hoy; de manera que el señor senador ha tenido suficiente tiempo para estudiar el problema y traer las sugerencias que le parecieran convenientes.

Además, este problema ha sido tratado dos veces en el bloque de senadores, y hoy, por última vez nuestro presidente de bloque preguntó si algún senador tenía alguna observación que añadir a la ley del estatuto del personal docente que se iba a tratar esta tarde, y nadie hizo objeción alguna.

Es por esto, señor presidente, que me voy a oponer a que este asunto vuelva a comisión. El señor senador puede tener razón en cuanto a querer incluir a los docentes que trabajan en las escuelas municipales, pero, de acuerdo a nuestro régimen constitucional puro, son las municipalidades las que deben encargarse de la instrucción pública del vecindario; eso es lo fundamental en nuestra forma republicana de gobierno, de acuerdo a nuestra Constitución.

Pero como las rentas de las municipalidades siempre han sido escasas, las provincias se han tenido que hacer cargo de esa obligación, que debería ser propia del vecindario, como es la de educar a sus hijos; y como las rentas provinciales también han sido escasas, ha tenido que ir la Nación en su auxilio para ayudar a difundir la instrucción pública, aunque no todavía en la escala que sería necesario y que hace falta dentro del territorio de la República.

No habría ningún inconveniente en que mañana o en cualquier otro momento, el señor senador presente un proyecto de ley que reglamente la situación del personal docente de las escuelas municipales de todos los municipios de la República, pero ello no tiene absolutamente nada que ver con este proyecto de ley, que se aspira sea tratado esta tarde. Por eso es que digo, como miembro informante de la Comisión de Instrucción Pública y presidente de la Comisión de Previsión Social, que me voy a oponer a que este proyecto vuelva a comisión, y me voy a oponer porque —debo confesarlo también— estoy un poco molesto porque los asuntos vuelvan a comisión. Y lo voy a decir con verdad y con toda entereza. A mí me han hecho volver asuntos a comisión, única y exclusivamente porque algunos señores senadores no se habían preocupado de estudiar esos problemas, y no estoy dispuesto a que vuelva otro proyecto a comisión.

**Sr. Gómez del Junco.** — No es el caso, señor senador.

**Sr. Soler.** — Cuando queramos estudiar algún proyecto, pongámonos de acuerdo para que no suceda que al presentar un problema o un despacho de comisión a mi cargo, se me venga con el sonsonete de que vuelva a comisión, porque esto demostraría, si yo lo admitiera, que soy un incapaz o que estoy dirigiendo mal las comisiones o dictaminando o trabajando deficientemente con los miembros de las mismas. No es justo, entonces, que a mí —que creo trabajar— se me coloque en esa situación por los que no quieren concurrir a las comisiones a hacerlo.

Por todas estas razones, señor presidente, voy a rogar al señor senador por Córdoba quiera tener la gentileza de retirar su moción de que este asunto vuelva a comisión. (*Prolongados aplausos en las galerías.*)

**Sr. Gómez del Junco.** — Pido la palabra.

Deseo aclarar, señor presidente, que en el estudio de esta ley, comenzado hace un tiempo, hubo una serie de inconvenientes. La última reunión fué en conjunto entre las comisiones de Instrucción Pública y de Trabajo y Previsión Social, en la que no estaba el señor senador. En cambio, se hallaba presente el señor senador Soza Loyola, presidente de la Comisión de Instrucción Pública, ausente por razones de salud en estos momentos, quien está

bien compenetrado del asunto, que hemos estudiado y discutido juntos en diversas oportunidades, como también con los ministros de Hacienda e Instrucción Pública, quienes quedaron en aclarar ciertos aspectos. Estoy esperándolos aún. No es que no me haya preocupado ni que me haya faltado tiempo, es que tenía mis escrúpulos y preocupaciones por los otros maestros, que son tan dignos como los que están en la barra.

Señor presidente: Rogaría que, para bien del magisterio, este proyecto vuelva a comisión. El hecho de que se demore la sanción del mismo 24 ó 48 horas, no puede afectar al señor senador, y le ruego que no haga presente sus escrúpulos de caballero cuando discutimos una ley de tanta importancia para el magisterio argentino. Estudiemos más a fondo el asunto. ¿Sabe el señor senador a cuánto asciende la ayuda que corresponderá acordar?

**Sr. Soler.** — Sí, señor senador.

**Sr. Gómez del Junco.** — Recuerdo al señor senador que los maestros de las provincias enseñan tanto como los particulares, y por el hecho de pertenecer al Estado municipal o provincial, no son socorridos por la Nación.

**Sr. Soler.** — Esa situación puede ser objeto de otra ley. No podemos pretender englobar en una sola todas esas situaciones.

**Sr. Presidente.** — Ruego a los señores senadores se sirvan no dialogar.

**Sr. Gómez del Junco.** — Hago presente al Senado mis escrúpulos. Ahora bien, si se resuelve considerarlo hoy, lo trataremos.

**Sr. Saadi.** — Pido la palabra.

Como presidente del bloque de senadores, voy a pedir que este asunto se trate en la sesión de hoy, tal como se resolvió en su oportunidad.

En efecto, señor presidente, comprendo la preocupación del señor senador por Córdoba, que se inspira en fines altamente patrióticos. Comparto algunas de sus inquietudes, pero ante la gravedad del problema a que está abocado el Senado, por la situación angustiosa de los profesores de los establecimientos incorporados de todo el país, no tienen suficiente fuerza sus observaciones, como para postergar la consideración de este proyecto.

Es cierto que hay situaciones injustas en el magisterio de escuelas municipales; es exacto que hay situaciones angustiosas también para ciertos maestros de escuelas provinciales, pero no es menos cierto, que el gran número de profesores y maestros que serán beneficiados de inmediato con esta ley, se encuentra en una situación mucho más apremiante y difícil. Las municipalidades y las provincias, por más pobres que ellas sean, pagaron mucho mejor a sus docentes que los establecimientos privados.

No todos los establecimientos se desenvuelven con fines comerciales o de lucro. Un gran



porcentaje de los mismos, casi el 80 % de los incorporados del país, han sido creados y son dirigidos por monjas, quienes, a costa de grandes sacrificios y privaciones, tratan de llevar la ciencia y la enseñanza a los niños.

Por esta razón, este proyecto de ley ha sido objeto de una especial preocupación por parte de todos los senadores peronistas. Fueron consultadas muchas opiniones, entre ellas, las de los señores ministros de Instrucción Pública y de Hacienda, y entiendo que, dada la gravedad de este asunto, no podemos dilatar un día más su consideración.

Y si es justo, como digo, el reclamo que solicita el señor senador por Córdoba, le acompañaremos gustosos en la consideración de un nuevo proyecto de ley, que nos puede presentar en la sesión próxima, a fin de que la justicia llegue a todo el magisterio del país.

**Sr. Durand.** — Por las razones que acaba de dar nuestro presidente de bloque, debemos tratar este asunto.

**Sr. Gómez del Junco.** — Con esa promesa, retiro mi moción.

**Sr. Durand.** — Justamente le iba a pedir a mi gran amigo, el señor senador Gómez del Junco, que retirara su moción, a fin de entrar de inmediato a la consideración de este asunto.

**Sr. Presidente.** — Habiendo retirado su moción el señor senador por Córdoba, se va a leer el despacho de la comisión.

—Se lee:

#### Despacho de comisión

*Honorable Senado:*

Vuestras comisiones de Instrucción Pública y de Previsión Social han considerado el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se establece el estatuto del docente de los establecimientos privados; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su sanción en la forma del siguiente:

#### PROYECTO DE LEY

*El Senado y Cámara de Diputados, etc.*

#### I. — De los establecimientos

**Artículo 1º** — Todos los establecimientos privados, de enseñanza, cualquiera sea su naturaleza y organización, ajustarán sus relaciones con el Estado y con su personal a las prescripciones de la presente ley.

**Art. 2º** — A los efectos de la aplicación de esta ley, el Poder Ejecutivo llevará un registro de todos los establecimientos privados, de en-

señanza, y de su personal, y clasificará a los establecimientos en:

- a) *Adscritos a la enseñanza oficial:* establecimientos privados, de enseñanza primaria, fiscalizados por el Consejo Nacional de Educación, y de enseñanza secundaria, normal o especial, incorporados a la enseñanza oficial dependiente del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública;
- b) *Libres:* establecimientos privados, de enseñanza secundaria, normal o especial que, siguiendo los planes y programas oficiales, no estén comprendidos en el apartado anterior;
- c) *Establecimientos privados, de enseñanza en general:* establecimientos privados, de enseñanza, directa o por correspondencia, no incluidos en los incisos a) y b).

**Art. 3º** — Los establecimientos de enseñanza privada que a la fecha de la sanción de la presente ley gocen de los beneficios de la incorporación a la enseñanza oficial dependiente del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, así como los que actúan fiscalizados por el Consejo Nacional de Educación, pasarán automáticamente a la categoría de «adscritos a la enseñanza oficial» y mantendrán tal carácter, mientras cumplan las normas en vigor y las que en adelante se dicten.

**Art. 4º** — En los establecimientos «adscritos a la enseñanza oficial» a cuyo sostenimiento contribuya el Estado no se autorizará la creación de nuevas divisiones de un mismo curso, ni la formación de nuevas secciones de un mismo grado, sin encontrarse cubiertas las existentes con el máximo de alumnos determinado por las disposiciones en vigor. Tampoco podrán autorizarse secciones anexas.

**Art. 5º** — El Poder Ejecutivo reglamentará el procedimiento a seguir para el ingreso y promoción de los alumnos de los establecimientos adscritos a la enseñanza oficial, en sus distintos ciclos y etapas de los planes de estudio.

**Art. 6º** — A los efectos del registro a que se refiere el artículo 2º de la presente ley, el Poder Ejecutivo establecerá un plazo no mayor de 60 días para que los establecimientos privados, de enseñanza, presenten la declaración documentada que se les requiera.

#### II. — Del personal

**Art. 7º** — El personal directivo, docente, docente auxiliar, administrativo, de maestranza y de servicio de todos los establecimientos privados, de enseñanza, tienen derecho:

- a) A la estabilidad, siempre que no estuviere en condiciones de acogerse a los beneficios de la jubilación, con las ex-

cepciones que se determinan en el artículo 13 de la presente ley;

- b) Al sueldo y salario mínimos;
- c) A la bonificación por antigüedad;
- d) A la inamovilidad en la localidad, salvo conformidad escrita del interesado.

Art. 8º — Para ser designado en cargos directivos o docentes en los establecimientos «adscritos a la enseñanza oficial» se exigirá título habilitante.

En aquellas localidades donde no se cuente con docentes que posean título habilitante para la enseñanza secundaria, normal o especial, se podrá autorizar la designación de maestros normales nacionales, o egresados de escuelas técnicas, según el caso, con carácter interino, los que quedarán habilitados para la enseñanza de la asignatura si en el transcurso de tres años merecieren concepto profesional favorable.

Art. 9º — El personal será designado por los respectivos establecimientos de enseñanza y, en el caso particular de los establecimientos «adscritos a la enseñanza oficial», con aprobación de los organismos oficiales que corresponda, la que será indispensable para perfeccionar la designación.

Art. 10. — Producida la vacancia de un cargo docente, el establecimiento privado deberá designar al titular dentro de un plazo no mayor de noventa días, no computándose a este efecto los períodos de vacaciones.

Art. 11. — El personal directivo y docente de los establecimientos «adscritos a la enseñanza oficial» tendrá los mismos deberes, se ajustará a las mismas incompatibilidades y gozará de los mismos derechos establecidos para el personal de los establecimientos oficiales.

En ningún caso el personal de un establecimiento adscrito podrá desempeñar cargo u horas en el establecimiento oficial al que estuviere incorporado.

Art. 12. — Los servicios prestados en establecimientos «adscritos a la enseñanza oficial», antes o después de la sanción de la presente ley, serán computables para optar a aquellos cargos y categorías de la enseñanza oficial que requieran antigüedad en la docencia.

Art. 13. — El personal sólo podrá ser removido, sin derecho a preaviso ni indemnización, por causas de inconducta, mal desempeño de sus deberes o incapacidad física o mental, previa substanciación del correspondiente sumario por autoridad oficial competente, en el que se garantizará la inviolabilidad de la defensa.

Art. 14. — En los casos de despido por causas distintas de las taxativamente enumeradas en el artículo anterior, se aplicarán las disposiciones de los artículos 157 y afines del Código de Comercio.

Los pagos en concepto de preaviso y/o de indemnización serán por cuenta exclusiva del esta-

blecimiento privado y, en el caso de los establecimientos «adscritos a la enseñanza oficial», no se computarán entre los gastos a cubrir con el porcentaje de sus ingresos arancelarios a que se refiere el artículo 21.

Art. 15. — Las sanciones y remociones decretadas por el organismo oficial pertinente no darán lugar a ninguna indemnización.

Art. 16. — En caso de cambio de planes de estudio, supresiones de cursos, divisiones o grados, previa autorización del organismo técnico respectivo y comunicación al Consejo Gremial de Enseñanza Privada, quedarán en disponibilidad, sin goce de sueldo, los docentes del establecimiento con menor antigüedad en la asignatura o en el grado.

No podrá evitarse la situación de disponibilidad de docentes mediante la quita de horas, cambios de asignatura o de turno, sin la conformidad escrita de los afectados.

Art. 17. — Al producirse vacantes o crearse en el establecimiento nuevos cursos, divisiones o grados, los docentes en disponibilidad serán designados de acuerdo con sus títulos habilitantes, con prioridad a cualquier otro, hasta recuperar la totalidad de su tarea docente.

### III. — De los sueldos y aranceles

Art. 18. — Se establece como sueldos mínimos los siguientes:

- a) Para el personal docente de los establecimientos comprendidos en el inciso a) del artículo 2º, un sueldo mensual no inferior al 60 % del sueldo nominal que, en igualdad de especialidad, tarea y antigüedad, perciban los docentes de los establecimientos oficiales.

Los maestros de grado que presten servicios con horarios discontinuos gozarán, además, de una bonificación no menor del 30 % calculada sobre el sueldo básico nominal que les corresponda;

- b) Para el personal directivo, docente auxiliar, administrativo, de maestranza y de servicio, de los establecimientos incluidos en el inciso a) del artículo 2º, y para todo el personal de los establecimientos comprendidos en los incisos b) y c), del mismo artículo, el Consejo Gremial de Enseñanza Privada establecerá un sueldo mensual no inferior, en ningún caso, al sueldo mayor que hubiere percibido este personal durante los dos últimos años, más un 25 % de aumento. Además, este personal gozará por cada 3 años de servicios, a partir de los 10 años de antigüedad, de una bonificación del 10 % sobre el sueldo básico nominal precedentemente establecido.

Los sueldos iniciales del personal de los establecimientos que se creen con posterioridad a la sanción de la presente ley, serán fijados, oídas las partes, por el Consejo Gremial de Enseñanza Privada y gozarán de la misma bonificación prefijada, contándose los plazos desde el comienzo de sus tareas.

Art. 19. — Los sueldos establecidos por el artículo anterior se abonarán durante los doce meses, independientemente de un sueldo anual complementario, equivalente a la  $1/12$  parte del total de sueldos percibidos en el respectivo año calendario.

Art. 20. — El sueldo que perciba el personal docente se entenderá, en todos los casos, como retribución por la sola prestación de los servicios específicos para que fuera designado.

Art. 21. — El Consejo Gremial de Enseñanza Privada establecerá, anualmente, el porcentaje de los ingresos por aranceles de enseñanza que los establecimientos privados destinarán al pago de los sueldos de su personal. Este porcentaje no podrá ser inferior al 50 % de dichos ingresos.

Art. 22. — Para fijar los aranceles de enseñanza que los establecimientos «adscritos a la enseñanza oficial» aplicarán a sus alumnos, el Consejo Gremial de Enseñanza Privada los clasificará en tres categorías, teniendo en cuenta las características de la zona, el material didáctico de que dispongan y las comodidades que ofrezcan a sus alumnos y, antes del 1º de enero de cada año, deberá someter a la aprobación del Poder Ejecutivo las tarifas mínimas propuestas para cada categoría.

Estos aranceles serán percibidos únicamente durante el período lectivo establecido por los organismos técnicos respectivos.

Art. 23. — Los establecimientos privados, de enseñanza, comprendidos en los incisos b) y c) del artículo 2º, comunicarán al Consejo Gremial de Enseñanza Privada los aranceles de enseñanza que fijen para sus alumnos, dentro de los 30 días de establecidos.

Art. 24. — Los establecimientos «adscritos a la enseñanza oficial» que demuestren que no pueden pagar los sueldos mínimos establecidos en el inciso a) del artículo 18, recibirán, y sólo para esos efectos, una contribución del Estado que no podrá ser superior a las  $2/3$  partes de los sueldos mínimos que se establecen en dicho artículo.

El Consejo Gremial de Enseñanza Privada, de acuerdo con las características financieras de cada establecimiento, y demás circunstancias que determinen su funcionamiento, propondrá anualmente al Poder Ejecutivo, en informes fundados, el monto de esta contribución.

Para los establecimientos que impartan enseñanza exclusivamente gratuita esta contribución del Estado podrá alcanzar hasta el 80 por ciento.

Art. 25. — A partir del 1º de enero de 1948, no se acordarán nuevas subvenciones, ni se pagarán en lo sucesivo las que hayan sido acordadas, en concepto de ayuda a la enseñanza que imparten, a colegios o instituciones de enseñanza privada, incluidos en el inciso a) del artículo 2º. Los importes correspondientes ingresarán en la cuenta especial que se habilitará para el cumplimiento de las disposiciones de esta ley.

Art. 26. — El Consejo Gremial de Enseñanza Privada fijará anualmente el número de becas de estudio, por grado y curso, que acordará cada establecimiento adscrito subvencionado por el Estado. Estas becas serán concedidas en una proporción no menor del 10 % del número de alumnos de cada curso o grado. Asimismo, a solicitud fundada de un establecimiento «adscrito a la enseñanza oficial» subvencionado por el Estado, el Consejo Gremial de Enseñanza Privada podrá autorizarlo a que exima a uno o más alumnos del pago total o parcial de los aranceles de enseñanza.

#### IV.- Del Consejo Gremial de Enseñanza Privada

Art. 27. — Créase el Consejo Gremial de Enseñanza Privada, que estará integrado por doce miembros y un presidente, a saber:

- a) Cuatro representantes del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública (2 por la enseñanza secundaria y normal; 1 por la enseñanza técnica y 1 por la enseñanza primaria);
- b) Dos representantes de la Secretaría de Trabajo y Previsión;
- c) Dos representantes patronales de los «establecimientos adscritos a la enseñanza oficial» (1 por los establecimientos religiosos y 1 por los establecimientos laicos);
- d) Un representante patronal de los establecimientos comprendidos en los incisos b) y c) del artículo 2º;
- e) Tres representantes del personal (1 por los profesores, 1 por los maestros y 1 por el restante personal).

El presidente será designado por el Poder Ejecutivo. Los representantes a que se refieren los incisos c), d) y e) serán designados por las asociaciones gremiales correspondientes.

Art. 28. — Es incompatible el ejercicio de una representación patronal o del personal, en el Consejo Gremial de Enseñanza Privada, con el ejercicio de cargos dependientes del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública.

Art. 29. — El presidente y los miembros del Consejo Gremial de Enseñanza Privada durarán 3 años en sus funciones y se desempeñarán con carácter honorario. Los representantes del personal comprendidos en el inciso e) del ar-



título 27 pasarán a revistar en disponibilidad en sus respectivos cargos, por el tiempo que dure su representación, sin que esta situación de disponibilidad interrumpa los beneficios que la presente ley les acuerda. Sus sueldos serán abonados por el Consejo Gremial de Enseñanza Privada, con cargo a sus fondos propios.

Art. 30. — Todos los miembros del Consejo Gremial de Enseñanza Privada tendrán voz y voto, y el presidente tendrá facultad para decidir en caso de empate, sin estar obligado a pronunciarse en favor de ninguna de las propuestas en debate. Las resoluciones serán tomadas por simple mayoría y los votos serán individuales.

Art. 31. — Son atribuciones del Consejo Gremial de Enseñanza Privada:

- 1º Intervenir en la fiscalización de las relaciones emergentes del contrato de empleo privado en la enseñanza y de la aplicación de la presente ley;
- 2º Resolver las cuestiones relativas al sueldo, estabilidad, inamovilidad y condiciones de trabajo del personal, que no estén contempladas en el presente estatuto.

Art. 32. — De las resoluciones del Consejo Gremial de Enseñanza Privada podrá interponerse recurso jerárquico ante el Poder Ejecutivo.

#### V. — De las sanciones

Art. 33. — Las transgresiones a cualquiera de los artículos de esta ley harán responsables, solidaria e ilimitadamente, al propietario y director del establecimiento privado, a quienes se aplicarán multas de \$ 100 a \$ 10.000 moneda nacional, sin perjuicio de la inhabilitación de ambos, que podrá ser dispuesta como acesoria de la multa impuesta, y de la cancelación de la adscripción acordada al establecimiento o clausura de la escuela. El importe de la multa será destinado a integrar el aporte que el Estado tiene a su cargo para el cumplimiento de esta ley.

Art. 34. — Para la imposición de las sanciones establecidas en el artículo anterior se aplicará el siguiente procedimiento:

- a) Formulada una denuncia ante el Consejo Gremial por persona, entidad gremial interesada, o funcionario de las reparticiones correspondientes, se dictará resolución disponiendo la iniciación del sumario respectivo;
- b) De la denuncia se dará traslado al imputado por el término perentorio de 10 días, haciéndole saber que dentro del mismo deberá presentar su descargo ofreciendo las pruebas que hagan a su

derecho, no admitiéndose ninguna medida probatoria ofrecida con posterioridad a dicho término;

- c) La prueba ofrecida será recibida por el Consejo Gremial o por la autoridad que éste designe dentro de los 15 días de vencido el término anterior;
- d) Transcurrido el mismo, se hayan o no producido las pruebas ofrecidas, o después de vencido el término a que se refiere el inciso b) sin que se haya presentado el descargo u ofrecido pruebas, el Consejo Gremial dictará resolución dentro de los 10 días, pudiendo previamente disponer las medidas que para mejor proveer considere necesarias;
- e) En caso de que la resolución impusiere multa y ésta no se obla dentro del término de 5 días, se dispondrá la ejecución judicial de la misma por vía de apremio, a cuyo efecto será título suficiente el testimonio auténtico de la resolución del Consejo Gremial de Enseñanza Privada;
- f) La resolución será apelable por el imputado, dentro del término de 5 días, ante la Justicia del Trabajo en la Capital Federal y territorios nacionales y ante la justicia que corresponda en las provincias, conforme a las respectivas leyes procesales, debiendo, al interponer el recurso ante el Consejo Gremial de Enseñanza Privada, acreditar el pago del importe de la multa aplicada;
- g) El recurso se fundará al deducirse, no admitiéndose ante el Tribunal de Apelación la presentación de escrito ofreciendo pruebas. La resolución definitiva deberá dictarse dentro de los 15 días de recibidas las instrucciones.

Art. 35. — Son nulas y sin ningún valor las cláusulas contrarias a las disposiciones de la presente ley, sin perjuicio de las sanciones establecidas en la misma. La renuncia del cargo para ser válida deberá ser ratificada por escrito ante el Consejo Gremial de Enseñanza Privada.

#### VI. — Disposiciones transitorias

Art. 36. — El personal de los institutos privados que a la sanción de esta ley tuviera, por lo menos, un año de antigüedad, quedará confirmado automáticamente y no podrá ser separado de sus cargos sino de conformidad con lo establecido en los artículos 13, 14 y 15.

Art. 37. — En ningún caso el personal de los establecimientos privados de enseñanza perderá las ventajas de carácter económico que hubiere obtenido con anterioridad a la sanción de la presente ley, y las modificaciones que implicaren la pérdida de las mismas hará incurrir al estable-

cimiento en el pago de la suma que se determina para la indemnización por despido.

Art. 38. — Los despidos o cesantías que se hubieran realizado o se realizaran entre el 19 de enero de 1947 y el 31 de diciembre de 1949, sin que mediara alguna de las causas establecidas en los artículos 13 ó 15, dará lugar al pago de triple indemnización.

Art. 39. — El personal docente jubilado que actualmente presta servicios en establecimientos adscritos a la enseñanza oficial, podrá continuar desempeñando sus tareas, de acuerdo con lo que establece esta ley.

Art. 40. — El régimen de las remuneraciones que establecen los artículos 18, 21, 24, así como las disposiciones de los artículos 22, 26 y correlativos, empezarán a regir a partir del 19 de enero de 1948.

Art. 41. — Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley se harán de rentas generales, con imputación a la misma, hasta tanto se incluyan las partidas respectivas en el presupuesto general.

Art. 42. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de las comisiones, 3 de septiembre de 1947.

*Gilberto Sosa Loyola. — Lorenzo Soler (h.). — Alberto Teisaire. — Demetrio Figueiras. — Juan Fernando de Lázaro. — Ricardo Octavio Lorenzón. — Samuel Gómez Henríquez. — Ramón Linidor Martínez. — Alfredo Busquet.*

**Sr. Presidente.** — En consideración.

**Sr. Soler.** — Pido la palabra.

Como miembro informante, debo manifestar que por fin vamos a entrar a tratar un proyecto que ha sido anhelado por un gran sector de los educadores de nuestro país.

Alguna vez íbamos a tener oportunidad de tratar una de las leyes, a mi entender, de más importancia y resonancia para la educación de nuestro pueblo. El magisterio particular o de colegios particulares ha estado trabajando afanosamente durante años para conseguir que el Estado dictara una ley que lo protegiera en su remuneración, en el producto de su esfuerzo, como así también en la estabilidad del empleo. Pero ha estado golpeando inútilmente ante puertas que jamás se habían abierto, y ahora, después de la revolución del 4 de junio de 1943, ha tenido la suerte que las puertas del Poder Ejecutivo y Legislativo se abrieran de par en par, para que pudiera manifestar cuáles son sus necesidades y cuáles son sus deseos. Como consecuencia del plan de trabajo y del plan de recuperación nacional y, sobre todo, del plan de justicia social de nuestro presidente, es que, después de tantos esfuerzos y sinsabores, viene a este recinto el

producto del estudio de un proyecto de ley, que si bien podrá no ser el ideal como recompensa al personal docente de escuelas particulares, por lo menos viene a llenar una necesidad sentida y a permitir y facilitar que, con el andar del tiempo, esta ley se vaya perfeccionando hasta que los docentes particulares se encuentren perfectamente equiparados con los que prestan servicios al Estado. Porque ésa es una de mis grandes aspiraciones: que el docente particular llegue a ser remunerado en la misma forma, ya que si por ley le vamos a exigir el certificado y el título habilitante para ejercer el profesorado lo mismo que al docente oficial, es lógico entonces que la remuneración sea igual para los dos casos, porque para mí, tanto es maestro el que enseña en un colegio particular como en uno oficial. Tan respetable para mí es uno como el otro, porque los dos son los que están forjando la grandeza espiritual de los hombres y de la patria entera (¡Muy bien!)

Llegando a esa conclusión, señor presidente, es que tomé con cariño la tarea de poder informar a la Honorable Cámara este proyecto de ley.

En él se establece, artículo por artículo, lo que se entiende que debe ser una ley más o menos completa. Pero antes de entrar a discriminar sobre los beneficios del profesorado, es necesario hacerlo sobre la categoría de los colegios, qué se entendía por colegios incorporados o qué se entendía por enseñanza libre o enseñanza particular. Y entonces, el proyecto de ley establece tres categorías, que se definen en el artículo 20, diciendo: «A los efectos de la aplicación de esta ley, el Poder Ejecutivo llevará un registro de todos los establecimientos privados de enseñanza, y de su personal, y clasificará a los establecimientos en: a) Adscritos a la enseñanza oficial: establecimientos privados, de enseñanza primaria, fiscalizados por el Consejo Nacional de Educación y de enseñanza secundaria, normal o especial, incorporados a la enseñanza oficial dependiente del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública; b) Libres: establecimientos privados, de enseñanza secundaria, normal o especial, que siguiendo los planes y programas oficiales, no estén comprendidos en el apartado anterior; c) Establecimientos privados, de enseñanza en general: establecimientos privados de enseñanza directa o por correspondencia, no incluidos en los incisos a) y b)».

La ley, señor presidente, se preocupa de las tres categorías y trata de introducir mejoras a los tres casos de colegios de enseñanza particular. Pero, sobre todo, a los adscritos a la enseñanza oficial, porque son los que están más próximos al Estado por su régimen. Los otros, a medida que van tomando más independencia hasta ser completamente libres, y

aun los inclusive por correspondencia, se distancian de la acción oficial y, por lo tanto, también se distancian de la ayuda oficial que se les pueda prestar a estos establecimientos.

Estudiando las estadísticas de los colegios incorporados que nosotros tenemos, llegamos a esta conclusión: institutos incorporados a la enseñanza secundaria, 240, a los cuales concurren 14.889 alumnos varones y 6.554 alumnas mujeres. Total 21.443 alumnos.

Profesores que dictan clase en estos establecimientos: varones, 1.741; mujeres, 1.821. Total: 3.562 profesores.

Enseñanza normal: 153 establecimientos, a los cuales concurren 964 alumnos varones y 20.420 alumnas mujeres. Total: 21.384. Profesores varones, 167; profesoras mujeres: 2.352. Total: 2.519.

Enseñanza comercial: 120 establecimientos. Concurren alumnos varones 4.415 y alumnas mujeres 4.176. Total: 8.591. Profesores que enseñan en los establecimientos comerciales: varones, 658; mujeres, 1.142. Total: 1.800 profesores.

Enseñanza profesional: 91 establecimientos. Concurren únicamente mujeres, porque no hay establecimientos de varones en esta categoría. De ese número de establecimientos de enseñanza profesional para mujeres concurren 3.085 alumnos; hay 20 profesores varones y 485 mujeres, en total 505. Enseñanza industrial: existen 20 establecimientos, a los que concurren 3.373 varones y ninguna mujer, es decir, que la enseñanza industrial es exclusiva para varones; hay 317 profesores varones y 38 mujeres, en total 355. Enseñanza de bellas artes, hay cinco establecimientos privados, concurren 3 varones y 146 mujeres, o sea un total de 149 alumnos; hay dos profesores varones y 26 mujeres, en total 28 profesores. Enseñanza de economía doméstica; hay 8 establecimientos, a los que concurren 31 alumnas mujeres, lo que es lógico, pues el hombre no se dedica a esta actividad; no hay profesores varones y 29 profesoras mujeres.

En resumen, tenemos 637 establecimientos, en los que se educan 23.584 varones y 34.472 mujeres, en total 58.056 alumnos. Dictan clases 2.905 profesores varones y 5.293 profesoras mujeres. En total, 8.198 profesores. Estos colegios, en su mayor parte, no tienen subvenciones del Estado con destino a la enseñanza, y por los datos que tengo a la vista esas partidas son relativamente escasas, ya que importan 1.069.930 pesos anuales.

**Sr. Tascheret.** — ¿Ese es el importe total de las subvenciones?

**Sr. Soler.** — Es el total de subvenciones que se da para la enseñanza privada.

**Sr. Tascheret.** — ¿En todo el país?

**Sr. Soler.** — Sí, señor senador.

Por supuesto, que existen otras subvenciones para beneficencia o asistencia social, o que se dan a los colegios particulares para construcción de edificios u otros destinos, pero esas subvenciones no tienen nada que ver con las subvenciones destinadas a la enseñanza, cuyo monto es bastante reducido en relación con el número de alumnos que concurren a esos establecimientos. Tengo también la estadística de los alumnos que se educan en las escuelas privadas con relación a los que se educan en las escuelas del Estado y puedo asegurar que es muy pequeña la diferencia a favor de los establecimientos oficiales; creo que esa diferencia no alcanza a 2.000 alumnos. Quiere decir esto que la enseñanza está muy repartida entre las escuelas particulares y las escuelas del Estado, lo que justifica el interés que debemos tener en el sentido de fomentar los establecimientos privados, a fin de colocar al país en situación ventajosa, dándoles facilidades a éstos para irse difundiendo por todo el país, porque colaborarán con los otros ayudándolos en la instrucción de nuestro pueblo.

Nosotros iremos paulatinamente a establecer la enseñanza privada en la misma forma que la han establecido las grandes naciones del mundo, como Inglaterra, Estados Unidos de Norte América, Suiza y varias otras en las cuales la grandeza y pujanza de su enseñanza se debe mucho más a la iniciativa privada que a la del Estado. En esas naciones, no solamente la enseñanza primaria y secundaria están en manos de particulares, sino que también la enseñanza superior universitaria, en su inmensa mayoría, se halla a cargo de institutos privados, y los títulos de habilitación para ejercer una profesión, son extendidos por institutos mantenidos por la acción privada y del pueblo, sin que el Estado participe nada más que en el otorgamiento de subvenciones en carácter de ayuda.

En esta forma, no solamente trabaja el Estado para educar al pueblo, sino que el mismo pueblo trabaja en una proporción elevadísima para contribuir a su educación.

Con esta ley, señor presidente, buscamos conseguir para los maestros particulares la estabilidad en sus puestos. El profesorado particular, hasta la fecha, ha estado permanentemente expuesto a que el director del establecimiento educacional, generalmente propietario del mismo, lo despidiera sin darle ningún género de explicaciones, porque el maestro particular no está amparado por leyes que garanticen su estabilidad, ni lo comprende la ley de empleados de comercio, que le garantiza la permanencia en su puesto, ni lo ampara ninguna ley de educación en el país.

Recién ahora, por intermedio de esta ley, le vamos a dar la estabilidad que tanto está necesitando y deseando el magisterio particular, porque estos profesores y profesoras se encon-

traban, hasta la fecha, viviendo en el aire, a merced de la buena voluntad de los señores directores, que, de la noche a la mañana, podrían quitarles sus puestos substituyéndolos por otros profesores, muchas veces menos capacitados, pero que se prestaban a ocupar el puesto con menos remuneración, porque muchos de estos colegios miran más el aspecto comercial de la institución que el educacional, y si tienen un profesor más barato, aunque sea menos idóneo, casi siempre optan por él.

Dice el artículo 7º lo siguiente: «El personal directivo, docente, docente auxiliar, administrativo, de maestranza y de servicio de todos los establecimientos privados de enseñanza tiene derecho: a) a la estabilidad, siempre que no estuviere en condiciones de acogerse a los beneficios de la jubilación, con las excepciones que se determinan en el artículo 13 de la presente ley; b) al sueldo y salario mínimos; c) a la bonificación por antigüedad; d) a la inamovilidad en la localidad, salvo conformidad escrita del interesado.»

Es interesante que se conozca en este cuerpo la clase de sueldos que estos profesores suelen percibir, y no me voy a referir solamente a los profesores de la Capital Federal, cuyos sueldos, por lo general, suelen ser más elevados que los del interior. Yo conozco, en mi provincia, Mendoza, profesores que trabajan por 40 pesos mensuales, no por 70, como les pagan aquí en Buenos Aires, y son profesores de Castellano y de Matemáticas. Hay otros que suman algo más, pero el término medio de lo que se paga en mi provincia, por cátedra o por grado, está alrededor de los 50 pesos mensuales.

A eso hay que agregar que el rector o director del colegio, a veces les dan un trabajito dentro del mismo establecimiento o los toman por horas extras para cuidar los alumnos mientras hacen los deberes, o a alguno más allegado se le pide que haga de secretario, a otros de auxiliares, pero el sueldo sigue siendo el mismo o mejorado en muy pequeña proporción, relación al trabajo que efectúan.

Esas situaciones deben terminar de una vez por todas, porque no solamente tienen salarios exigüos, sino que ninguna posibilidad de recompensa o mejoramiento con el transcurso de los años de servicio, ni por su perfeccionamiento en los métodos de enseñanza. Lo mismo gana ahora un profesor que lo que ganaba hace 20 años, después de tan prolongados servicios. Por eso queremos suplir esa diferencia haciendo que un profesor, a medida que vayan pasando los años de servicio, vaya mejorando su situación de sueldo o salario.

Otra ventaja es la siguiente: la inamovilidad en el cargo en la zona en que lo está desempeñando, para que ningún profesor pueda ser trasladado de un colegio a otro o de una localidad a otra, sin la anuencia del mismo pro-

fesor o maestro, con lo que se evitarán esos desplazamientos injustos, ya que sería, además, una forma de violar esta ley que les da estabilidad, si les dejamos la facultad de trasladar sin el consentimiento del maestro o profesor. Sería una forma de exigirle la renuncia, por ejemplo, a un profesor que ejerce en la Capital, donde tiene todos sus intereses y familia, trasladarlo a un colegio similar del Chaco, Río Negro, Mendoza o cualquier otra localidad. Ese profesor se vería obligado a dejar la cátedra antes de abandonar sus familiares e intereses.

Pero así como damos derecho, también imponemos obligaciones. Con esta ley se establece la carrera del personal docente, y para que sea justa es lógico que al personal docente se le exija las condiciones reglamentarias para poder ingresar a la docencia, y lo menos que se le puede exigir es capacidad, traducida en los títulos habilitantes. Ninguna persona podrá ser profesor sin título habilitante. Desgraciadamente, estamos acostumbrados a ver, sobre todo en provincias, que en la enseñanza de los colegios particulares, cuando no hay profesor, se echa mano de cualquier persona de buena voluntad que quiera desempeñar el cargo de tal. Hay que ir perfeccionando eso, ya que les vamos a dar salarios más o menos acomodados e ir dignificando la docencia libre, exigiéndoles títulos habilitantes para su desempeño.

**Sr. Tascheret.** — Si me permite el señor senador, los actuales maestros que no poseen títulos, ¿en qué condiciones van a quedar?

**Sr. Soler.** — Los actuales maestros van a quedar incluídos en los beneficios de la ley de enseñanza general de la Nación, equiparándolos en todos sus derechos y deberes.

Este proyecto establece que cuando un maestro o profesor no tiene título habilitante, pero una antigüedad de tantos años en ejercicio y es eficiente en su desempeño, de hecho queda consagrado como profesor, reconociéndosele su capacidad como tal. Se aplica esta norma existente para el orden nacional.

—Ocupa la Presidencia el presidente provisional del Honorable Senado, contraalmirante (R.) Alberto Teisaire.

**Sr. Amelotti.** — Eso ya está previsto.

**Sr. Soler.** — Otra gran ventaja de esta ley será que desde el momento en que se promulgue, todos los que son profesores quedan confirmados en sus puestos, para evitar las triquiñuelas que la ley pueda permitir a los directores de colegios particulares y hacer imposibles los desplazamientos injustos, ahora que van a ser remunerados equitativamente —porque lo que han tenido hasta ahora no puede llamarse remuneración—, para que no vaya a suceder que al ser abonado su trabajo con justicia se

abran los apetitos de otros y sean desplazados estos profesores que hace tantos años que están prestando servicios para ocupar esos puestos, con otros arrivistas que recién se incorporan a la enseñanza privada.

La designación del personal directivo y administrativo va a ser garantida en la misma forma que el personal docente. El personal directivo y auxiliar de los colegios va a tener los mismos deberes y los mismos derechos que el oficial. Es claro que nosotros no podemos darle en esta ley el sueldo en la misma proporción que se da en un establecimiento oficial. Por ejemplo, si el rector de un colegio nacional gana 900 ó 1.200 pesos, no podemos exigir que el rector de un colegio particular también gane lo mismo, porque, por lo general, los rectores de estos colegios suelen ser propietarios del establecimiento; tampoco podemos hacerlo con los jefes de congregaciones religiosas que mantienen esos establecimientos. Pero para evitar que pudieran burlar la ley, se establece que el sueldo inicial de estos profesores será, como mínimo, el máximo que le estén pagando en este momento, más un 25 % de mejora y a la vez se otorga la facultad de ir mejorando, después de los 10 años de servicios, a razón de 10 % por cada tres años de servicios que haya acumulado. De manera que la ley no solamente contempla la situación del personal docente, sino inclusive la del personal administrativo y aun la de los más humildes, tales como el portero y el sirviente, que también quedan comprendidos.

En cuanto a la garantía del personal en su trabajo, dice el artículo 13: «El personal sólo podrá ser removido, sin derecho a preaviso ni indemnización, por causas de inconducta, mal desempeño de sus deberes o incapacidad física o mental, previa sustanciación del correspondiente sumario por autoridad oficial competente, en el que se garantizará la inviolabilidad de la defensa.»

Este artículo no necesita ninguna clase de comentarios, porque por sí solo se define perfectamente.

El artículo siguiente, dice: «En los casos de despido por causas distintas de las taxativamente enumeradas en el artículo anterior, se aplicarán las disposiciones de los artículos 157 y afines del Código de Comercio.» Es decir, los beneficios de la indemnización por despido. Todo profesor o maestro que sea despedido del colegio, va a tener derecho a la indemnización correspondiente. Para evitar nuevas trampas que se puedan plantear y la remoción interesada y maliciosa de los actuales maestros y profesores de los colegios particulares, esta misma ley establece que todo maestro que desempeñe su puesto entre el 1º de enero de 1947 y el 31 de diciembre de 1949 y que sea despedido, el establecimiento tendrá

que pagarle una indemnización triple de la que le corresponde de acuerdo con la ley de despido de los empleados de comercio.

Los señores senadores pueden ver que se trata de garantizar al máximo la estabilidad de los profesores.

Ahora, me voy a referir a los sueldos. Dice el artículo 18, en el capítulo de los sueldos y aranceles: «Se establece como sueldos mínimos los siguientes: a) para el personal docente de los establecimientos comprendidos en el inciso a) del artículo 2º, es decir, para los adscritos a la enseñanza oficial que son la mayoría, un sueldo mensual no inferior al 60 % del nominal que, en igualdad de especialidad, tarea y antigüedad, perciban los docentes de los establecimientos oficiales.»

Se ha creído prudente fijar en este artículo, como veremos más adelante, un porcentaje, un tanto por ciento y no una cantidad determinada. Porque los sueldos básicos de la Nación pueden ir variando de acuerdo con las circunstancias y necesidades de nuestro magisterio. De manera que si nosotros establecemos una cantidad fija, de hecho, a cada aumento o rebaja de los sueldos oficiales, tendríamos que modificar esta ley. En cambio, estableciendo un porcentaje, automáticamente, a medida que suban los otros sueldos, subirán también los del docente particular.

Los maestros de grado que prestan servicios con honorarios discontinuos, gozarán además de una bonificación no menor del 30 % calculada sobre el sueldo básico nominal que les corresponda. Ello obedece a que hay maestros que tienen varias horas de clase a la mañana y a la tarde; es decir, que tienen un horario discontinuo. Esos profesores, además de su sueldo básico, gozarán de un aumento de un 30 % de su sueldo, para compensarlos de las incomodidades que les reporta ese horario discontinuo.

Para el personal directivo, docente, auxiliar administrativo, de maestranza y de servicios de todos los establecimientos incluidos en el inciso a) del artículo 2º, y para todo el personal de los establecimientos comprendidos en los incisos b) y c) del mismo artículo, el Consejo Gremial de Enseñanza Privada establecerá un sueldo mensual no inferior, en ningún caso, al sueldo mayor que hubiere percibido ese personal durante los dos últimos años, más un 25 % de aumento. Además, este personal gozará por cada tres años de servicios, a partir de los diez años de antigüedad, de una bonificación del 10 % sobre el sueldo básico nominal precedentemente establecido. Los sueldos iniciales del personal de los establecimientos que se creen con posterioridad a la sanción de la presente ley serán fijados, oídas las partes, por el Consejo Gremial de Enseñanza Privada y gozarán de la misma bonificación por



fijada, contándose los plazos desde el comienzo de sus tareas.

Nosotros hemos establecido que el sueldo básico por hora de cátedra es de 50 pesos. Era de 40 pesos, y gracias a la ley número 12.914, sancionada el año pasado, llegamos a esa cifra de 50 pesos. De acuerdo con lo establecido en el despacho que consideramos, el docente particular percibirá ahora el 60 % de 50 pesos, es decir, 30 pesos por hora. Para 68.200 horas semanales de cátedra, según cálculos del inspector Lucero, tendríamos en concepto de sueldo, 2.046.000 pesos al mes, que en doce meses representan 24.552.000 pesos. A esto habrá que agregar un décimotercer mes por aguinaldo, que también debe abonarse, por esta ley, al docente.

Con esta ley concretamos un sueño querido de todos los docentes de establecimientos privados, que estaban colocados en una situación de suma inferioridad con respecto al personal docente de las escuelas del Estado. Me refiero a las vacaciones pagas. Al personal docente particular se le pagaba por lo general, ocho o nueve meses de salario en el año; en el período de sus vacaciones, no percibían emolumentos, ni tenían ninguna entrada en su hogar. Por el articulado de esta ley, nosotros les garantizamos las vacaciones pagas, y por si eso fuera poco, les garantizamos el mismo derecho que a los docentes oficiales, acordándoles también un mes de aguinaldo, de manera que los cálculos los hacemos a razón de trece meses en el año: doce meses de trabajo y el mes de aguinaldo que tienen derecho a gozar.

Según las estadísticas, nosotros tendríamos en los 13 meses 26.598.000 pesos, para sueldos de los profesores de enseñanza secundaria.

Según la estadística del Consejo Nacional de Educación, hay 2.929 maestros; en cifras redondas, 3.000, con un sueldo promedio aproximado de 210 pesos por maestro. En realidad, serían 203 ó 205, pero se ha tomado la cifra redonda de 210 pesos que ganaría un maestro a cargo de grado. Tres mil a 210 cada uno, son 630.000 pesos mensuales, o sea 8.190.000 al año; más los 26.598.000, suman 34.788.000 pesos.

El Estado contribuirá con una parte de esta bonificación. La ley va a exigir que al docente particular se le pague el sesenta por ciento del monto del sueldo que se le paga a un maestro o profesor oficial. Pero, ¿de dónde saldrá ese sesenta por ciento?

Se establece por el mismo articulado de este proyecto de ley que el Consejo Gremial de la Enseñanza Privada, que ella crea, establecerá el arancel que han de pagar los alumnos en cada colegio, el que será distinto según la categoría del colegio y según la enseñanza que se imparta. De esa entrada que tendrá el colegio, se exige que el cincuenta por ciento por

lo menos debe ser destinado a sueldos, y como ese cincuenta por ciento no va a alcanzar a cubrir el sesenta por ciento del sueldo de los maestros y profesores oficiales, el Estado va a tener que ir en ayuda del colegio particular; y la misma ley establece que será ayudado el colegio hasta con las dos terceras partes del sueldo mínimo que ha de pagarle al maestro o profesor, siempre y cuando el colegio demuestre, ante el Consejo Gremial, que las entradas provenientes de los aranceles no alcanzan para abonar el sueldo mínimo fijado por el artículo 18, inciso a).

El Estado podrá aportar hasta las dos terceras partes. Habrá colegios que no necesiten que el Estado concorra con esas dos terceras partes; pero yo, que soy un hombre práctico y conozco estas cosas, sé que, por desgracia, si establecemos las dos terceras partes, el Estado va a tener que hacer frente a ellas efectivamente; conozco la picardía de muchos directores de estos establecimientos, que se van a ingeniar en tal forma para que los ingresos que abonen los alumnos por aranceles de enseñanza apenas alcancen a cubrir los gastos de la tercera parte; de manera tal que el Estado debe estar resuelto a cubrir las dos terceras partes en total, porque siempre que en una ley se dice «hasta tanto», ya sabemos que siempre se llega al tope.

Pero, estando el Estado dispuesto a hacer ese sacrificio en bien de la enseñanza, tenemos la convicción de que estas dos terceras partes de esos 34.000.000 de pesos que se insumirán en pagos de sueldos, representan 23.192.000 pesos.

Pero el Estado, en realidad, sale ganando, porque si se oficializaran los colegios particulares, sin incluir edificios, personal directivo, administrativo y de servicios, etcétera, solamente en sueldos básicos de profesores, en vez de gastar esa cantidad, gastaría 44.330.000 pesos. De manera que el Estado ahorra, en realidad, unos cuantos millones de pesos, dada la ayuda que indirectamente le presta el particular al educar a este porcentaje de alumnos que, de lo contrario, tendrían que ser educados directamente por el Estado.

Como ven los señores senadores, se trata de una ley eminentemente beneficiosa para el maestro y el profesor y, también, para los establecimientos particulares de enseñanza que actúan de buena fe y con pocas miras al mercantilismo, que es lo que nosotros debemos evitar cuando se trata de la enseñanza; y a la vez se beneficiará en parte la Nación, al aprovechar el gran esfuerzo de los particulares en esta tarea educativa.

¿Cómo se va a regir esta ley? Se va a garantizar la aplicación y el cumplimiento de esta ley mediante la creación de un Consejo Gremial de Enseñanza Privada. Dice el artículo 27 al referirse a este consejo gremial: «Créase el Consejo

Gremial de Enseñanza Privada, que estará integrado por 12 miembros y un presidente, a saber:

a) Cuatro representantes del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública (dos por la enseñanza secundaria y normal, uno por la enseñanza técnica y uno por la enseñanza primaria); b) dos representantes de la Secretaría de Trabajo y Previsión; c) dos representantes patronales de los «establecimientos adscritos a la enseñanza oficial» (uno por los establecimientos religiosos y uno por los establecimientos laicos); d) un representante patronal de los establecimientos comprendidos en los incisos b) y c) del artículo 29; e) tres representantes del personal (uno por los profesores, uno por los maestros y uno por el restante personal).

«El presidente será designado por el Poder Ejecutivo. Los representantes a que se refieren los incisos c), d) y e) serán designados por las asociaciones gremiales correspondientes.»

Pero por otro artículo se establece que los que sean designados delegados al consejo gremial no podrán ejercer el magisterio: serán representantes del magisterio dentro de este consejo, pero no podrán ejercerlo. Al no poder hacerlo, si no tienen quien les garantice su sueldo, su salario, difícilmente van a poder desempeñar esta función, porque se trata de gente modesta que tiene que trabajar para vivir. Entonces, la ley prevé que en este caso los delegados de los maestros serán pagados con los fondos propios que se asignen al consejo gremial; de manera que los profesores y maestros que vengán a ocupar estos tres cargos, van a tener que dejar de ejercer la docencia; pero el Estado, por medio del consejo gremial, les va a garantizar la subsistencia abonándoles el sueldo que deben pagarles los colegios en los cuales estaban desempeñando sus funciones.

En esa forma, podrán también venir maestros del interior a desempeñarse dentro de este consejo gremial.

Luego viene una serie de reglamentaciones de este cuerpo que se crea para la dirección y administración, que, más que de dirección y administración, es un cuerpo de control.

Después viene el capítulo de las sanciones, en el que se trata de ser lo más breve posible para que el sumario que se tenga que instruir sea lo más estricto en lo que se refiere a la substanciación del mismo, en forma tal que el maestro no vaya de Herodes a Pilatos permanentemente y termine por aburrirse o ser víctima de injusticias. Los sumarios, desplazamientos o cualquier medida que se tenga que tomar, están perfectamente garantizados en la misma ley, aligerando en forma tal los términos, que antes de un mes se debe saber en qué situación se coloca al instituto que haya cometido falta, o

si hay algún otro inconveniente en la aplicación del contrato de trabajo.

Esta ley podrá no ser todo lo perfecta que deseamos, pero, dentro de la imperfectibilidad humana, hemos tratado de conseguir lo más que podemos en estos momentos para el profesorado y el cuerpo de docentes de establecimientos particulares. Tengo la esperanza, como dije al principio, de que este estatuto se irá perfeccionando con los años, hasta llegar al desiderátum de que toda la enseñanza privada esté perfectamente protegida y, en su caso, ayudada por el Estado.

En buena hora venga la influencia privada o la participación de los particulares a ayudar a educar al soberano de la Nación. Necesitamos escuelas, escuelas y más escuelas. En la República Argentina no debe haber un solo analfabeto, y a todo aquel que quiera venir a ayudarnos a educar al pueblo, debemos acogerlo con los brazos abiertos. Por eso sostengo permanentemente, cuando se habla de la plétora de maestros, que no hay en la República Argentina tal plétora de maestros; y cuando se nos habla de que debemos limitar la enseñanza del magisterio porque sobran maestros, les digo que están en un profundo error. Se debe seguir formando maestros en gran escala, y ¡ojalá la educación mínima que tenga un habitante de la República sea la de un maestro! ¡Ojalá, repito, todos los habitantes nuestros sean perfectos maestros!

No vamos a tener derecho a decir que sobran maestros mientras haya un analfabeto en la República Argentina. Por eso soy un gran admirador de Sarmiento y desearía en mi vida poder ser émulo de él, para fundar escuelas, porque cuantas más escuelas fundemos, más grande será la patria, y cuanto más defendamos al maestro, más dignificaremos a nuestra Argentina. (*¡Muy bien!*)

**Sr. Amelotti.** — Pido la palabra.

Pocas palabras he de agregar a las que expresara el señor miembro informante para aconsejar la aprobación de este proyecto que se encuentra a consideración del Senado.

Es evidente que la grandeza de la patria depende del grado de cultura de sus ciudadanos. En ese sentido, los maestros, olvidados desde la época de la colonia hasta la fecha, que han contribuido en alto grado a la difusión de la cultura, ahora, y por acción de este gobierno revolucionario, ven contemplada su injusta situación.

Tal es el valor y la importancia extraordinaria que tiene la enseñanza en la prosperidad de los pueblos, que nuestra Constitución, en forma precisa y terminante, en los artículos 59, 14, 25 y 67 se refiere a la misma. Merced al esfuerzo de esos maestros, es que nuestro país ha tenido

prohombres de la talla de San Martín, Vélez Sársfield, Goyena, Paz y tantos otros que podríamos nombrar. Y debemos recordar esto en el momento preciso en que estamos empeñados en la sanción de una ley que ha de mejorar la situación del magisterio de las escuelas particulares, que son, precisamente, las que han contribuido a la formación de esos próceres.

Voy a dar mi voto favorable al proyecto, pero tengo una objeción que formular. Considero que el porcentaje que se ha fijado para establecer los sueldos no se ajusta a la hora presente. Es menester que el sueldo esté a tono con las necesidades del momento, para que, cuando el maestro llegue a clase, a ejercer su noble misión, lo haga trasuntando optimismo y no preocupado por sus problemas económicos. De ese modo, habremos contemplado la situación de los maestros, y sus alumnos tendrán así fe en el venturoso porvenir que le aguarda a nuestra patria.

**Sr. Presidente (Teisaire).** — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general.

—Se vota y resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Teisaire).** — En consideración en particular.

—Sin observación, se votan y aprueban los artículos 1º a 8º, inclusive.

—Se lee el artículo 9º.

**Sr. Tascheret.** — Pido la palabra.

Pregunto al señor miembro informante cuál es el sentido de este artículo, sobre todo cuando dice: «con aprobación de los organismos oficiales que corresponda, la que será indispensable para perfeccionar la designación». Indudablemente me parece un poco genérico el sentido y no específico. ¿En qué forma se va a hacer la aprobación? ¿Cuáles son los organismos? Será el Ministerio de Instrucción Pública, o el Consejo Nacional de Educación, según dónde estén adscritos?

En segundo lugar, ¿qué se entiende por perfeccionar la designación?

**Sr. Soler.** — En realidad, señor presidente, esta ley deberá ser reglamentada, como toda ley.

En el capítulo referente a la creación del Consejo Gremial de Enseñanza Privada se especifica el control de las designaciones.

**Sr. Tascheret.** — No son facultades del consejo gremial el controlar las designaciones.

**Sr. Soler.** — Yo he entendido que al intervenir en la fiscalización de las relaciones emergentes del contrato de empleo privado en la enseñanza y de la aplicación de la presente ley, éstas son las cuestiones relativas al sueldo, estabilidad y condiciones de trabajo del personal.

**Sr. Tascheret.** — Pero no designación.

**Sr. Soler.** — No, la designación tiene que venir en la reglamentación y ha de especificarse qué organismo es el que va a entender, o si será el ministerio directamente. En realidad, el nombramiento lo va a hacer el director del establecimiento, pero el consejo o el ministerio tendrán que vigilar si el profesor propuesto tiene título habilitante y si está en condiciones legales, y después el ministerio, o el consejo a mi entender, tendrá que dar su conformidad.

**Sr. Tascheret.** — Pido la palabra.

Propondría una modificación en la parte final del artículo 9º, que dijera que será indispensable la autorización de esos organismos oficiales para confirmar la designación hecha por un establecimiento privado.

El sentido del artículo 9º cuando establece que el personal será designado por las autoridades de los establecimientos de enseñanza privada, exige a los organismos oficiales de quienes dependan esos establecimientos una aprobación de ese nombramiento. Por eso digo que esa aprobación estará sujeta a ciertas condiciones de reglamentación, que servirá para confirmar o no confirmar el nombramiento.

**Sr. Antille.** — Pido la palabra.

Voy a agregar una pregunta que va a esclarecer el sentido del artículo, porque la observación hecha por el señor senador tiene razón de ser, desde que el nombramiento no puede ser perfeccionado, sino ratificado o confirmado.

Sin embargo, hago notar que la designación no podrá completarse; y la parte primera que se refiere a la autorización dada a los establecimientos para designar, es totalmente restringida por la necesidad de la ratificación o confirmación, desde que la ley dice que será indispensable para ratificar o perfeccionar la designación. Quiere decir, que si no hay aprobación del organismo oficial a quien está adscrito, no hay designación. Podría ponerse la palabra «provisionalmente» al principio, y después con la confirmación quedaría definitivamente salvada.

Solicitaría al señor miembro informante y al autor del proyecto que aceptaran la modificación que propongo, si no hubiera inconveniente.

**Sr. Soler.** — Pido la palabra.

Creo que la palabra «perfeccionar» que nosotros hemos empleado, viene implícitamente a comprender el término de «confirmar». Pero no hay ningún inconveniente en cambiar la palabra «perfeccionar» por «confirmar».

Yo no sé si los miembros de la comisión tienen inconveniente en aceptar la modificación propuesta, pues yo, como presidente de la misma, no tengo ningún inconveniente, vuelvo a repetir, en aceptarla.

**Sr. Cruz.** — Pido la palabra.

Creo, señor presidente, que suprimiendo la última parte del artículo 9º quedaría más clara su redacción, diciendo: «El personal será designado por los respectivos establecimientos de enseñanza, y en el caso particular de los establecimientos «adscriptos a la enseñanza oficial», serán ratificados por los organismos oficiales que corresponda.

Entonces habría que suprimir la parte final donde dice: «la que será indispensable para perfeccionar la designación».

**Sr. Presidente (Teisaire).** — Tiene la palabra el señor senador por Catamarca.

**Sr. Saadi.** — En realidad, el sentido que debe tener este artículo debemos dejarlo perfecta y categóricamente determinado; los directores de establecimientos no deben ser quienes van a nombrar. Ellos deben proponer el nombramiento, y los organismos respectivos designarlo. Estoy de acuerdo con la indicación del señor senador por Tucumán, pero con el alcance que le he dado, señor presidente.

**Sr. Tascheret.** — Indudablemente, el Estado va a pagar las dos terceras partes casi, de modo que tiene una gran participación.

**Sr. Saadi.** — Es claro. A propuesta del director, sí, señor presidente, pero debe ser el organismo oficial el que lo designe.

**Sr. De Lázaro.** — Me voy a oponer a esa supresión que formula mi colega por Tucumán, porque es necesario que se lleve un control, ya que puede plantearse el caso de un profesor que haya sido destituido en un colegio determinado, y sea propuesto para otro. Si no hay fiscalización, podría ser designado en este otro establecimiento, y nos encontraríamos con una persona que, a pesar del título habilitante, no está en las condiciones requeridas para ejercer el cargo.

**Sr. Saadi.** — Con permiso de la Presidencia, le voy a observar al señor senador por Tucumán que eso queda perfectamente aclarado con el alcance que acabo de darle, porque el director propone, no nombra, y el organismo oficial es el que va a nombrar. En esa forma dejamos subsanado todo inconveniente.

**Sr. Tascheret.** — No comparto totalmente la opinión del señor senador por Catamarca, aunque creo que estamos de acuerdo completamente en su sentido. El nombramiento del docente pertenece indudablemente al establecimiento, no es un nombramiento oficial del gobierno. Por esa razón creo que deben designarlo las propias autoridades de ese establecimiento privado, pero para poder confirmarse los mismos, necesitan la aprobación del organismo oficial. Por eso entiendo que, tratándose, como bien lo dijo el señor senador por Catamarca, de un asunto delicado, su sentido debe quedar perfectamente aclarado.

**Sr. Saadi.** — No veo qué inconveniente puede existir, señor presidente, desde el momento en que el Estado contribuye con una gran proporción para que ese profesor sea pagado, y lo hace, inspirado, por una parte, en un principio de justicia social, y por otra, para permitir una mayor dedicación y mejor desempeño de sus funciones, y siendo así, señor senador, y estando perfectamente aclarado que será a proposición del director, no puede haber inconveniente, porque de lo contrario colocaríamos a los mismos organismos o establecimientos del Estado en una situación completamente distinta. ¿Por qué no designan actualmente a los profesores de las escuelas del Estado los mismos directores del establecimiento? Porque es menester que exista un contralor mayor, que se realicen ciertas investigaciones indispensables que los organismos del Estado están en condiciones de realizar, que se consulten con los registros oficiales que poseen los mismos y una serie de antecedentes que deben reunirse para hacer una designación acertada.

Estamos de acuerdo con el señor senador por San Juan; en el fondo, no hay diferencias, es cuestión de forma según él mismo lo advierte.

Tampoco tendría inconveniente en que se dé otra redacción al artículo, pero con este alcance: no puede escapar al contralor severo del Estado, para bien de la docencia, de los alumnos y del país.

**Sr. Antille.** — ¿En todos los casos, aun para los establecimientos de carácter privado, se exige ese contralor?

**Sr. Cruz.** — No, señor senador.

**Sr. Antille.** — Sugiero que se suprima esa parte.

**Sr. Tascheret.** — El artículo lo establece, señor senador: Se refiere a los adscriptos a la enseñanza oficial.

**Sr. Antille.** — Las primeras palabras del artículo dicen que será designado por los establecimientos de enseñanza, y en el caso particular de los institutos adscritos a la enseñanza oficial, con la aprobación de los organismos oficiales. Quiere decir que en los otros casos no necesita intervención del organismo oficial y que la designación puede hacerla el director del colegio. Creo que ése es el espíritu del artículo.

Me parece, señor presidente, que es indispensable modificar la redacción del artículo, puesto que la palabra «perfeccionar» no es aceptable. Debería decir, más bien, «ratificar» o «confirmar», pero no «perfeccionar», porque el nombramiento queda hecho, y entra en función de inmediato. La ratificación es posterior. Creo que éste debe ser el alcance de la disposición del artículo.

A este respecto, debo recordar que en algunos institutos universitarios los profesores son elegidos por el claustro, pero se confirma la desig-

nación cuando se envía la terna al Poder Ejecutivo de la Nación. Ahí hay una designación y un ejercicio de la función, pero la confirmación es posterior al ratificarla el Poder Ejecutivo. Esto mismo creo que es lo que ha querido decirse en este artículo: que el nombramiento que hace el director del colegio particular, cuando éste es incorporado, debe ser ratificado por el organismo de quien dependa, ya sea el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública o el Consejo Nacional de Educación.

**Sr. Gómez del Junco.** — Pido la palabra.

Yo comparto la opinión del señor senador por Catamarca, por cuanto el espíritu de la ley es garantizar la designación de los más capaces, y, al mismo tiempo, garantizar los emolumentos y la estabilidad. Por consiguiente, si el Estado garantiza la estabilidad, también debe garantizar la designación de los más capaces, para que no quede al arbitrio de los señores directores, sin el contralor del Estado.

**Sr. Tascheret.** — Pido la palabra

Insisto en mis palabras y propongo solamente la modificación que indiqué al principio: substituir la palabra «perfeccionar» por la palabra «confirmar» o por «ratificar», como sugiere el señor senador por Santa Fe. De no ser así, iríamos a una cuestión indudablemente de fondo, como lo dije antes, y es si estos maestros o docentes, que pertenecen a establecimientos de enseñanza adscritos a la enseñanza oficial, serán considerados como empleados del Estado o como empleados particulares.

Mi opinión es que deben ser considerados como empleados particulares, y por eso es que no comparto lo expresado por el señor senador por Catamarca en el sentido de que a las autoridades del establecimiento de enseñanza sólo les es permitido proponer, porque de ser así, estos docentes dejarían de ser considerados como personal particular o privado.

Por esta razón, creo que se consigue el mismo objeto y se mantiene el mismo espíritu con que ha sido redactado el artículo, cambiando la palabra «perfeccionar» por la palabra «confirmar» o por «ratificar», porque si indudablemente el Estado tiene interés —como ha dicho el señor senador por Córdoba— que el docente que se designe tenga las condiciones necesarias y el título habilitante y el Estado, a su vez, se responsabilice por una serie de condiciones que debe tener el docente para enseñar. Eso está suficientemente garantido con la aprobación o no del docente que nombre la autoridad del establecimiento de enseñanza.

**Sr. Amelotti.** — Pido la palabra.

Yo no sé hasta dónde podemos legislar respecto a una institución de carácter particular, en el sentido en que lo estamos haciendo. Entiendo, que ésta es una ley de subsidio para beneficiar o favorecer a los maestros de las escuelas incorporadas que económicamente no

están en condiciones de fijar los sueldos, que desearíamos pagasen. En consecuencia, señor presidente, yo creo que las escuelas particulares deben reservarse el derecho de poder hacer las designaciones de la manera que más convenga a sus intereses. Es evidente que procurarán que sean siempre los mejores hombres dentro del sentido de la eficiencia como maestros, por su conducta, honestidad y moralidad.

Creo que en la forma que está redactado el artículo contempla la verdadera función y el verdadero control que el Estado debe tener sobre estas instituciones de carácter particular, pero no tenemos que olvidar que muchas de ellas tienen grandes sumas invertidas en muebles, útiles, edificios y una serie de cosas sobre las cuales nosotros no tenemos por qué entrar a considerar.

Yo haría moción en el sentido de que aceptáramos el artículo tal cual está, porque ya lo dice la palabra «perfeccionar» el nombramiento, es decir, quitarle al nombramiento si es posible todas las dificultades que lo invaliden, o lo hagan nulo. Eso es todo.

**Sr. Saadi.** — Pido la palabra.

No puedo aceptar, señor presidente, bajo ninguna forma el temperamento fijado por el señor senador por Córdoba.

Hagamos un distingo: en los establecimientos particulares que no se acojan a los beneficios que les acuerda esta ley —me refiero a la contribución del Estado para pagar a su personal— y que si se ajustan a los sueldos mínimos establecidos por esta ley, no tiene para qué intervenir el Estado, pero en establecimientos de educación, llámense privados, llámense incorporados, en los cuales contribuye el Estado con su dinero para el mantenimiento de los mismos, es forzoso que se establezca el contralor del mismo. No puede ser de otra manera. No pueden tener ningún inconveniente los directores de establecimientos particulares en que el Estado controle esa situación. Si están inspirados en el alto fin en que se inspira el Estado, de proporcionar una mejor enseñanza, no puede haber inconveniente. Si hay propósito desconocido, ignorado u oculto, entonces sí puede haberlo.

¿Al Estado qué le interesa, señor presidente? Que se designe al buen profesor, que se imparta una verdadera enseñanza, que al docente se lo remunere como corresponde; le interesa el bienestar de todos. Siendo así, no puede, como digo, haber inconveniente.

Los establecimientos particulares que cumplan con esta ley sin recurrir al auxilio pecuniario del Estado, tienen todas las facultades para designar por sí solo. Pero donde el Estado contribuya con su ayuda económica, debe también tener el derecho de controlar esta designación del personal, porque si queremos que



se nos acuerde un beneficio, debemos aceptar que de éste emanen obligaciones.

**Sr. Amelotti.** — Eso es lo que dice el artículo, señor presidente.

**Sr. Soler.** — Vamos a entrar en una discusión que nos insumirá un tiempo precioso, cuando con una sola aclaración puede evitarse. En realidad, actualmente, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes, todo colegio incorporado, para designar profesores, debe llenar una serie de requisitos, entre los cuales está el de la idoneidad de los profesores, comprobada por un título habilitante, etcétera. De acuerdo con el proyecto, los colegios adscritos tendrán que cumplir con este requisito y si no lo hacen no tendrán el beneficio de la adscripción.

**Sr. Amelotti.** — Con la intervención del Estado.

**Sr. Soler.** — De manera que no hay que preocuparse por este problema, porque el espíritu de la ley ha sido y es que el Estado tenga un control sobre la designación de estos profesores, porque en alguna forma debe llevar a la práctica la garantía que hay que darle al educando a fin de que no pague un mal maestro, que no reúna las necesarias condiciones para el desempeño de sus tareas en un establecimiento adscrito. De lo contrario, podría ser designado un profesor de manifiesta incapacidad y el Estado tendrá que pagarle las 2/3 partes de su sueldo, sin ninguna garantía de que el alumno aprovechará su enseñanza. El Estado no puede estar tirando su dinero sino que debe pagar buenos servidores de la enseñanza en los colegios incorporados. Por eso se exige el control del Estado.

La última parte del artículo es nada más que explicativa; el artículo podría terminar con las palabras «que corresponde». Lo que sigue no es más que una forma explicativa de la frase anterior.

**Sr. Saadi.** — Por eso, señor, suprimamos esa última parte, de acuerdo a la indicación del señor senador por Tucumán.

**Sr. Soler.** — Lo que abunda no daña, señor senador.

**Sr. Saadi.** — Es que en este caso daña, porque confunde y hay impropiedad, señor senador.

**Sr. Soler.** — Si no hay propiedad en el término, acepto la indicación del señor senador Tascheret, que soluciona todo el problema, porque la atribución a que confiere el proyecto a los organismos oficiales que corresponda, será indispensable para «confirmar» la designación. De modo que creo que con cambiar nada más que el término «perfeccionar» por «confirmar», está solucionado el problema.

**Sr. Saadi.** — Con esta modificación y con el alcance dado al artículo en la discusión del punto, no hay ningún inconveniente en su sanción.

**Sr. Soler.** — La comisión acepta cambiar el término de «perfeccionar» por el de «confirmar».

**Sr. Figueiras.** — Pido la palabra.

Me voy a solidarizar con el presidente de la comisión a que pertenezco, en el sentido de que se acepte el cambio de la palabra tal como lo ha propuesto el señor senador por San Juan. Debo decir que el artículo está perfectamente bien, porque no hay ninguna razón para crear obligaciones al Estado y no darle los derechos correspondientes. No solamente se debe controlar si el profesor es capaz, señores senadores, sino también qué clase de enseñanza da, y si la misma está a tono con nuestro sistema republicano de gobierno. Todos sabemos que no sólo en algunos de estos colegios particulares, sino incluso en los propios colegios de la Nación, hubo profesores que tienen fotografías de todo menos de nuestros próceres, de manera que hay que vigilarlos para que la enseñanza esté de acuerdo no solamente con la capacidad del profesor, sino también con lo que conviene a los bien entendidos intereses de la República.

Por eso voy a aceptar, si también lo acepta el señor senador Soler, presidente de la comisión, la substitución de la palabra «perfeccionar» por «confirmar». Lo demás está perfectamente.

**Sr. Soler.** — Está aceptado, señor presidente.

**Sr. Vallejo.** — Pido la palabra.

Yo quisiera también en dos palabras, fijar mi manera de pensar al respecto.

Indudablemente que lo ideal en este caso sería oficializar todos los colegios para que, en esas condiciones, el Estado pudiera tener el pleno derecho de efectuar las designaciones. Pero cuando no se los oficializa, sino que se interviene en su ayuda, es lógico que los establecimientos dependen de sus directivas, y en esas directivas tiene una intervención directa el Estado con su cuerpo de inspectores y de vigilancia diaria y permanente, como muy bien lo ha dicho el señor miembro informante.

Entonces, es necesario dejarles la atribución de que sean ellos los que nombren los profesores, porque en el caso contrario, ¿cómo y cuándo va a nombrar el Poder Ejecutivo todos los maestros que propongan los colegios incorporados? ¿Y qué función va a tener la dirección de los establecimientos, si es que el gobierno no acepta esa propuesta, por el solo hecho de que las ha dejado dormir, sin que exista una objeción para ese nombramiento?

Por eso considero que el artículo queda perfectamente bien con la sustitución de la palabra «perfeccionar» por «confirmar».

**Sr. Busquet.** — Pido la palabra.

Tengo una duda al respecto. ¿Y en el caso de que el nombramiento no sea aprobado por los organismos oficiales?

**Sr. Soler.** — Tiene que proponer uno nuevo.

**Sr. Busquet.** — A mí se me ocurría —siempre sometida esta sugestión a criterio de la comi-

sión— redactar el texto de este artículo en la siguiente forma: «El personal será designado por el respectivo establecimiento de enseñanza, y en el caso particular de los establecimientos adscritos a la enseñanza oficial, será designado provisionalmente por aquéllos, hasta tanto los organismos oficiales que correspondan presten la aprobación, requisito indispensable para confirmar la designación.»

**Sr. Soler.** — Es lo mismo, con otras palabras.

**Sr. Busquet.** — Es más terminante; no se presta a dos interpretaciones.

**Sr. Tascheret.** — En la forma en que está redactado, se sobreentiende que si no se obtiene la confirmación del organismo oficial, ese profesor queda con carácter provisional. Es necesario que el establecimiento designe su personal.

**Sr. Busquet.** — Pero con carácter provisional.

**Sr. Tascheret.** — Hasta tanto se confirme.

**Sr. Antille.** — Pido la palabra.

Esta prescripción es una de las más importantes de la ley.

El carácter de instituciones privadas que tienen algunos establecimientos, si no se hiciera la aclaración, le daría para mí una especie de independencia en la designación de los profesores, por intermedio de sus organismos directivos.

Ahora, con la modificación que se viene introduciendo, con el espíritu de la tendencia que revela la discusión, la designación de los profesores va a depender, al final, de lo que resuelvan los organismos oficiales. Ya se apunta por el señor senador por La Rioja que puede ocurrir que, sin haber oposición, no se ratifique el nombramiento, por la gran cantidad de empleados, de profesores, cuyos antecedentes deberán estudiarse, a los efectos de ratificar o no sus nombramientos.

Esto me mueve a proponer a la comisión y al autor del proyecto una explicación referente a la situación en que quedarían aquellos profesores cuyos nombramientos no fueran ratificados sin motivo o causa. Porque bien pudiera ocurrir que a pesar del transcurso del tiempo, no ratificándose la designación, la dirección de las escuelas o establecimientos no sabría qué hacer, esperar indefinidamente, o buscar otro.

No creo que corresponda al organismo oficial, al ministerio o al consejo, la designación en el último caso con un concepto de ratificación de los profesores; si no hay motivo fundamental para excluirlo de la enseñanza en un colegio de esta especie, creo que están obligados los organismos oficiales a aceptar la designación que hayan hecho las direcciones de las escuelas particulares. Sin motivo serio, creo que no corresponde la interferencia de los organismos oficiales en esas designaciones.

Por eso, yo propondría al señor miembro informante de la comisión que aceptara que se ra-

tificará la designación, salvo el caso de que hubiera causa justificada para resolver lo contrario.

**Sr. Soler.** — Si me permite, señor senador, le voy a contestar.

Aquí se va a producir el mismo caso que el que se produce en la designación de jueces por parte del Poder Ejecutivo; éste nombra y el Senado presta el acuerdo. El director del colegio nombra, pero los organismos oficiales lo confirman o no; un candidato a juez, a quien el Senado no le presta acuerdo, no llega a serlo. Un profesor nombrado por el director del colegio particular, a quien los organismos oficiales le niegan el acuerdo, no llega a ocupar el cargo.

**Sr. Antille.** — No es el caso, señor senador.

**Sr. Soler.** — El profesor o maestro nombrado por el director sigue ocupando interinamente su puesto, hasta que el Estado se decide a aceptarlo o no. Si se rechaza el nombramiento del director, tendrá que buscar a otro profesor hasta que obtenga el acuerdo del organismo del Estado y lo puedan confirmar.

**Sr. Amelotti.** — Pido la palabra, para volver a insistir en que, a mi juicio, el artículo está bien como se encuentra redactado. Y digo que está bien porque he recogido las opiniones vertidas en el recinto y llego a la conclusión que su redacción contempla en forma amplia, precisa y terminante ese deseo de intervención del Estado, tendiente a perfeccionar el nombramiento. Quiere decir que el Estado se reserva la facultad de perfeccionar el nombramiento, lo cual significa que puede llegar a suplantarlo al candidato propuesto por el director, obligándole a buscar otro profesor...

**Varios señores senadores.** — ¡No! ¡No!

10

## MOCION

**Sr. Durand.** — Si me permiten, señor presidente y señores senadores. En vista de la forma en que se desarrolla el debate alrededor de este artículo, formulo moción de orden para que el Senado pase a un breve cuarto intermedio, que podría ser de quince minutos.

—Apoyado.

**Señor Presidente (Teisairé).** — Se va a votar la moción formulada por el señor senador por Salta.

—Se vota y resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Teisairé).** — Invito a los señores senadores a pasar a cuarto intermedio por quince minutos.

—Así se hace siendo las 19 horas.

11

# CONTINUA LA CONSIDERACION DEL ESTATUTO DEL DOCENTE

—Siendo las 19 y 20 horas, dice el:

**Sr. Presidente** (Teisaire). — Continúa la sesión.

Tiene la palabra el señor miembro informante de la comisión.

**Sr. Soler.** — Reunida la comisión, ha resuelto no aceptar ninguna otra modificación fuera de la propuesta por el señor senador por San Juan en el sentido de cambiar la palabra «perfeccionar» por «confirmar».

**Sr. Presidente** (Teisaire). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 9º con la modificación propuesta por el señor senador por San Juan.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Sin observación, se leen y aprueban los artículos 10 a 17 inclusive.

—Se lee el artículo 18.

**Sr. Amelotti.** — Pido la palabra.

Hago indicación, señor presidente, para que en lugar del 60 % sea el 80 %, y voy a fundar mi proposición en el hecho de que teniendo en cuenta que los sueldos oficiales oscilan en alrededor de los 275 pesos, al abonar el 60 % como mínimo al profesor, que en este caso solamente percibirá un sueldo de \$ 165 mensuales, que es inferior al sueldo mínimo fijado por el Estado. Al fijar el 80 %, estableceríamos un sueldo mínimo que sería de \$ 220, sin perjuicio de que en aquellos institutos en los que su situación económica permita el otorgamiento de mayores sueldos, así se haga.

En consecuencia, haría moción en el sentido de que se modifique el porcentaje del 60 al 80 por ciento.

**Sr. Presidente** (Teisaire). — ¿Acepta la comisión?

**Sr. Soler.** — Por desgracia, la comisión no va a poder aceptar; digo por desgracia, porque mi gran deseo es que lleguemos al 100 %, pero los estudios que se han hecho al respecto no permiten llegar más que al 60 por ciento.

En la práctica veremos si es posible llegar al 100 %, pero para ello hay que basarse en los aportes arancelarios que se establezcan en los colegios todos los años. El año que viene, de acuerdo al arancel que fije el consejo gremial, veremos hasta donde podemos llegar. De lo contrario, va a ser necesario que el Estado aporte el total, y para ello, el señor ministro de Hacienda prefiere hacerse cargo directamente de los colegios.

**Sr. Figueiras.** — Señor presidente: Hace un momento hemos pasado a cuarto intermedio y los señores senadores que han deseado hacer alguna observación al proyecto la han podido hacer entonces. Como la financiación de este proyecto fué hecha juntamente con el señor ministro de Hacienda, pediría que no se solicitara ninguna modificación en este sentido.

**Sr. Soler.** — Eso mismo iba a decir yo. La comisión no puede aceptar modificaciones de esta naturaleza sin consultar al señor ministro de Hacienda sobre el particular. Nuestro deseo es dar el máximo; se discutió si se daba el 70, el 80 o el 100 %, llegándose a la conclusión de que por ahora íbamos a proponer el 60 %, de manera que, si la contribución a cargo del Estado fuera la máxima —los dos tercios de ese 60 %— el aporte insumiría unos 23.000.000 de pesos, más o menos.

Si los aranceles de enseñanza que perciban los establecimientos adscritos son elevados, con el 50 % de estos ingresos, que es la contribución mínima a su cargo, para el pago de sueldos, podremos llegar a un sueldo mayor. Por el contrario, si los aranceles son bajos, en los años sucesivos habría que modificarlos de modo que se nivelen los sueldos según las exigencias del momento.

**Sr. Tascheret.** — Pido la palabra.

No estoy del todo de acuerdo con lo expresado por el señor miembro informante. Entiendo que en parte debería aceptarse la modificación que propone el señor senador por Córdoba.

No es posible que nosotros, que actualmente consideramos casi a diario proyectos de escalafón, equiparación de sueldos, etcétera, vayamos a permitir que por intermedio de este estatuto que justamente se está considerando debido a la situación económica desastrosa que tienen los docentes particulares, se establezcan sueldos como lo dijera el señor senador por Córdoba, inferiores a 200 pesos. Por eso creo que es compatible la modificación que se propone en ese sentido, estableciendo o fijando un sueldo no inferior a 200 ó 250 pesos.

**Sr. Cruz.** — Pido la palabra.

Comparto la opinión del señor senador por Santa Fe y estoy de acuerdo con lo que acaba de expresar el señor miembro informante.

En realidad, estamos fijando sueldos mínimos y no máximos. Y como bien lo ha dicho el señor miembro informante, éstos se irán reajustando en el próximo año.

Nosotros aceptaríamos de buen grado las modificaciones propuestas —y en esto creo que interpreto el sentir de todos los señores senadores—, es decir, en darle un mayor porcentaje en los sueldos de este sufrido personal docente, pero para ello tendríamos necesariamente que volver a consultar la opinión del señor ministro

de Hacienda, que ya la ha dado sobre el particular, y, precisamente, se han ajustado las escalas de acuerdo con su opinión.

Se trata, señores senadores, de una vieja aspiración de este gremio que viene luchando hace más de un año por conseguir este estatuto, el que debió haberse tratado en las sesiones extraordinarias, de acuerdo con un mensaje del Poder Ejecutivo, y que por causas ajenas a nuestra voluntad, no ha podido ser considerado en esa oportunidad y se ha ido dilatando.

Por estas razones, estimados colegas de Córdoba y San Luis, les pediría, como lo solicitó el señor senador por Santa Fe, que votemos el estatuto tal cual está.

Creo que en parte vamos a satisfacer las inquietudes y aspiraciones del personal docente de las escuelas particulares, que en este momento, en gran número, se encuentra en las galerías.

**Sr. Amelotti.** — Pido la palabra.

Los argumentos que se dan no son suficientemente valederos. A mí no me alarma la cifra de veintitrés millones con que el Estado tiene que contribuir...

**Sr. Soler.** — Veintitrés millones ahora; mañana serán treinta.

**Sr. Amelotti.** — ...para poder hacer llegar a esos esforzados servidores del Estado, en una forma indirecta, este beneficio que nosotros hemos propuesto.

Entiendo que si hemos fijado un sueldo mínimo de 250 pesos, no se justifica en modo alguno que deben ganar menos de esa cifra.

Por otra parte, la existencia de los colegios incorporados se justifica por la falta de escuelas oficiales en la proporción de las necesidades del país, lo que equivale a decir, como muy bien lo ha expresado el señor miembro informante, que aun a pesar de estas cifras que nosotros podemos acordar, el Estado siempre resulta beneficiado, y siendo así, ese beneficio no debe ser sobre el hambre, la miseria y las dificultades de los maestros. No, señor presidente. No puede ser así.

Nosotros debemos contribuir con nuestro voto para que el maestro tenga un sueldo digno, como dije recientemente, y que cuando llegue a su clase, lo haga con una expresión de alegría y optimismo, y no que esté trasuntando miseria y penas. Esto es a lo que me opongo.

Yo creo que al mejorar el 80 %, podría tener relación con algún otro artículo donde se fije el porcentaje que va a pagar el Estado. Modifíquese esa proporción, y si los dos tercios no son suficientes, pongamos cuatro quintos o la proporción que fuera necesaria para cubrir este aporte.

El maestro no puede ganar, señor presidente, menos de 220 pesos, porque el 80 % aun significa una injusticia.

Por otra parte, para poder justificar esto, debo aclarar que en mi provincia existen 185 escuelas particulares y se imparte instrucción a veinté mil alumnos, lo que equivale a decir que faltan bancos, ¿y quién de nosotros no conoce la tragedia que se origina todos los años por la falta de bancos, especialmente en las escuelas secundarias? Entonces, hagamos lo posible, ya que tenemos esta oportunidad —dado que el problema, como dijimos hace un momento, viene desde la época de la colonia—, para que los maestros y profesores que prestan sus servicios en estos institutos estén remunerados, si no en la medida justa, por lo menos de acuerdo con cualquier otro empleado del Estado, que tiene doscientos pesos y desempeña funciones muy inferiores, en muchos casos, a las del maestro.

Por eso insisto en que debemos modificar el artículo fijando el 80 % y no el 60 % del sueldo que gozan los maestros oficiales.

**Sr. Vallejo.** — Pido la palabra.

Todos los senadores compartimos el anhelo del señor senador por Córdoba, y he dicho hace un rato que el ideal sería llegar a la oficialización, para que, como ha dicho el señor miembro informante, paguemos el 100 %. Pero esto se ha hecho de acuerdo con un minucioso estudio y hemos llegado a la conclusión de que en la situación actual no podemos llegar a más del 60 %. Por consiguiente tenemos que votarlo así.

Por otra parte, pronto vamos a tener oportunidad de estudiar el presupuesto, y ya está previsto en el artículo 41 de esta ley, que el gasto que la misma demande se hará de rentas generales hasta tanto se incluya la partida en el presupuesto general. Cuando estudiemos el presupuesto, será el momento de ver si podemos incorporar una partida mayor para poder satisfacer así el anhelo del señor senador por Córdoba.

Le ruego al señor senador que retire su indicación para que podamos seguir considerando el proyecto de ley.

**Sr. Martínez.** — Pido la palabra.

Yo considero muy atendibles las razones que da el señor senador por Córdoba, pero —porque aquí hay un pero— la comisión ha estudiado este proyecto juntamente con el señor ministro de Hacienda, y éste nos ha informado que el Estado podría contribuir con esos 23.192.000 pesos. Si nosotros atendiéramos a lo que solicita el señor senador por Córdoba, esta partida se elevaría a más de 44.000.000 de pesos, y la comisión, por consiguiente, no puede aceptar esa modificación sin consultar antes con el ministro de Hacienda, lo que significaría una demora en la consideración del proyecto.

Por consiguiente, solicito a mi distinguido colega que no insista en su pedido de modificación. Hay tiempo luego para ello. Yo creo, que, en bien del mismo magisterio, podría desistirse el señor senador de su observación, porque

si la aceptáramos, significaría un aumento de más de 21.000.000 de pesos, y entonces habría que consultar, repito, con el señor ministro de Hacienda, para saber si el Estado está en condiciones o no de afrontar ese gasto.

**Sr. Antille.** — Pido la palabra.

Yo no me encuentro facultado, señor presidente, para dar mi voto en sentido favorable o contrario a la proposición del señor senador por Córdoba. Si no se puede obtener el consentimiento de la comisión para la mejora del sueldo que el señor senador por Córdoba propone, posiblemente el Senado no podría continuar considerando este proyecto en esta sesión y tendríamos que pasar a cuarto intermedio y esto no sé si beneficiaría o perjudicaría más a los profesores de los institutos privados.

Por otra parte, desearía que la comisión me informara sobre si ha hecho estudios relacionados con los sueldos que los profesores privados van a tener por esta ley y los que actualmente perciben.

Si el beneficio que se obtiene por este proyecto no es suficiente, siempre se podrá modificar la ley una vez que tengamos todos los antecedentes y la financiación indispensable para no romper el equilibrio del presupuesto. Actualmente —y desearía una confirmación al respecto— los sueldos de que gozan los profesores de los institutos privados son míseros en su casi totalidad.

**Sr. Cruz.** — Pero por esta ley van a ganar 30 pesos por hora.

**Sr. Antille.** — Pero lo que yo pregunto es si se han hecho estudios financieros con respecto a la aplicación de esta ley, y a cuánto llegará el monto de los sueldos, porque el artículo que se está discutiendo habla de una proporción del 60 % sobre los sueldos mínimos actuales de los institutos oficiales.

**Sr. Cruz.** — Así es.

**Sr. Antille.** — No pueden ser inferiores a ese porcentaje. Pero lo que yo quiero saber es en cuánto son superiores los sueldos fijados por esta ley, en relación con los que gozan actualmente.

**Sr. Amelotti.** — Es muy variable, porque hay distintos sueldos.

**Sr. Antille.** — No, señor senador; los profesores que se han acercado a esta casa y a la Comisión de Instrucción Pública han de haber traído antecedentes que justifiquen el alza.

**Sr. Amelotti.** — Yo le voy a hacer una pregunta: ¿cree el señor senador...?

**Sr. Antille.** — No señor, soy yo quien le está preguntando, y no le puedo contestar. (Risas.)

**Sr. Amelotti.** — No hay ninguna relación, porque pueden los maestros no ganar nada, y el hecho de que nosotros les asignemos 50 pesos no significaría una verdadera mejora, de acuerdo con el criterio de justicia que inspira esta ley.

**Sr. Antille.** — De acuerdo, pero que se tengan los fondos y que se hagan los estudios finan-

cieros. Si el señor senador insiste, yo le preguntaría si es preferible levantar esta sesión sin votar la ley...

**Varios señores senadores.** — ¡No, no!

**Sr. Amelotti.** — Yo hago una moción de justicia.

**Sr. Antille.** — ¡Pero es que hay que argumentar contemplando todos los aspectos!

**Sr. Presidente** (Teisire). — Tiene la palabra el miembro informante.

**Sr. Soler.** — Voy a hacer una aclaración al señor senador por Santa Fe en cuanto a los sueldos. El sueldo que actualmente ganan los profesores particulares no tiene un cartabón fijo, se paga muy caprichosamente. Algunos profesores ganan menos de ochenta centavos por hora, y otros ganan un poco más, según la generosidad del director del colegio. En la enseñanza primaria me han informado que en algunas zonas ganan a razón de 40 pesos por mes. De los 275 pesos que gana un maestro oficial, a los 40 que ganan los maestros particulares hay una diferencia muy pronunciada. Esos sueldos de ochenta y setenta y cinco centavos la hora de los profesores van a subir en una proporción bastante elevada, porque de acuerdo con esta ley ese sueldo subirá por lo menos a \$ 7,50 la hora efectiva de clase.

He especificado al informar el despacho que el 60 % del sueldo mínimo que percibirán los profesores particulares, con relación a los 50 pesos por hora que se paga en la enseñanza oficial, significa 30 pesos por hora. El sueldo que estos catedráticos tendrán, dependerá del número de horas que dicten, tal como sucede en los colegios oficiales. En cuanto al maestro, cuyo sueldo no se computa por cátedra, sino por grado, ganará el 60 % del sueldo básico establecido en la enseñanza oficial, es decir, sobre 275 pesos, cobrará 165; y si tiene horario discontinuo, como se agrega un 30 % más sobre ese sueldo de 165, ganará \$ 214,50.

Ya he dicho también, que mi anhelo era que fijáramos el 100 % con respecto a la enseñanza oficial. La posición psicológica que han explotado los directores de colegios particulares para pagar sueldos miserables a los docentes, radica en que han sostenido que esos puestos significaban una ayuda que percibían maestros o profesores que tenían simultáneamente cargos oficiales. Pero la realidad es otra, porque la mayor parte de esos profesores no tienen otros cargos, y lo que se daba como ayuda, ha quedado como única retribución.

El sentimiento que anima al señor senador por Córdoba es muy noble, muy plausible, y yo participo de ese criterio, y ya le he dicho que yo iría al 100 % pero por desgracia las finanzas nuestras, según el señor ministro de Hacienda, no nos permite todavía llegar a esto hasta que no tengamos un estudio más integral sobre la ley y sepamos qué parte se le puede exigir al



alumnado en lo referente a aranceles y de acuerdo con lo que él pueda aportar, vendrá el Estado a suplir esas deficiencias llevándolo hasta el 100 por ciento.

**Sr. Antille.** — ¿Y de esto no hay estadísticas?

**Sr. Soler.** — No hay, son cálculos sólo aproximados. No sabemos cuántos alumnos gratis tienen los establecimientos privados. Muchos alumnos pobres recurren a la benevolencia de los directores de los establecimientos, la mayoría de los cuales son religiosos. Estas congregaciones tienen muchas veces alumnos gratis, los que son recibidos por amor cristiano. De manera que no sabemos la proporción que existe de estos alumnos. Pero el año que viene, en que va a actuar el Consejo Gremial y él será quien fije el arancel, tendremos una estadística sobre la cual podremos modificar lo que sea necesario, porque esto es un ensayo.

El señor ministro de Hacienda ha tenido que vencer algunas resistencias a este respecto.

Nadie sabe mejor que los propios docentes particulares, que han tenido que ir de la ceca a la meca y de Herodes a Pilatos durante todos estos años, venciendo una montaña de resistencias que se debían exclusivamente a que el Estado tenía que aportar una cantidad determinada y no estaba resuelto a ello. A fuerza de ruegos y haciéndole comprender el problema se ha evolucionado y llegado a esta situación en que el Estado va a ayudar generosamente a solucionar estas dificultades de los docentes particulares.

**Sr. Antille.** — Había querido interrumpir al señor senador para averiguar si la representación de estos profesores beneficiados con la ley, los organismos representativos, han explicado a la comisión si aceptarían los principios básicos en cuanto a retribuciones que esta ley fija, es decir, cuál es la aspiración actual de los organismos representativos.

**Sr. Soler.** — El ideal para estos organismos es llegar al desiderátum del 100 %. Yo conozco el espíritu de ellos porque es humano y lógico, pero sé también que en lo más íntimo de su ser, lo que desean es conseguir algo que los lleve a una conquista definitiva en cuanto a la participación del Estado en el pago de esos emolumentos. Ellos son tan generosos —que me perdonen algunos de ellos que me están oyendo, pero debo decir la verdad— que aceptan gustosos que llegue al 70 %. Es claro que si les damos el 60 % eso no los va a satisfacer del todo, pero con el espíritu que los animan van aceptarlo, porque saben el esfuerzo que está haciendo el erario público y los hombres que hemos participado en la estructuración de esta ley para beneficiarlos así como los grandes escollos que hemos tenido que vencer. Ya hemos volteado una piedra de ese murallón e iremos abriendo brechas hasta llegar en los años sucesivos al 100 por ciento.

**Sr. Cruz.** — Pido la palabra.

Ese es el deseo de los miembros de la comisión, y tengo la completa seguridad que lo van a aceptar tal cual está sancionando el Senado, el proyecto que ha despachado su Comisión de Instrucción Pública.

Lo que interesa al personal del sindicato en este asunto es que se sancione cuanto antes, y en tal sentido voy a pedir a mis colegas que se vote el estatuto en la sesión de hoy, porque en la forma en que se está presentando la discusión, estoy por creer que no podrá terminarse esta noche. En consecuencia, pido a mis colegas que procedamos a la votación del despacho tal como ha sido formulado por la comisión.

**Sr. Martínez.** — Le pido una vez más a mi distinguido colega que retire su moción en bien mismo del magisterio, porque si así no lo hiciera, yo haría moción en el sentido de que este proyecto vuelva nuevamente a comisión para ser tratado con la presencia del señor ministro de Hacienda, lo que significaría que el proyecto no podría ser aprobado esta noche, desde luego con el consiguiente perjuicio para el mismo magisterio.

**Sr. Amelotti.** — La moción que había hecho era concordante con el espíritu de todos los señores senadores y lamentaría profundamente que se viese en ella un propósito de obstruir o dificultar la sanción de esta ley. Dije desde los primeros momentos, que iba a apoyar con toda decisión y entusiasmo este proyecto, porque lo considero una de las leyes de mayor justicia que hemos sancionado hasta el presente.

Por consiguiente, voy a retirar la moción que he formulado. Lo hago en mérito a los motivos que se han expuesto y también al deseo de los señores senadores de mejorar la situación de los maestros, y en virtud de hallarnos en las postrimerías del período de sesiones, darle una rápida sanción.

**Sr. Vallejo.** — Pido la palabra.

Como todos los señores senadores tienen en sus pupitres el despacho de la comisión y lo conocen perfectamente, hago indicación en el sentido de que en la votación se enuncie solamente el número de cada artículo, sin leerlo. Si algún señor senador tiene alguna observación que hacer, que la formule.

—Asentimiento.

**Sr. Presidente (Teisaire).** — Habiendo asentimiento, así se hará.

—Sin observación, se aprueban los artículos 18 al 23 inclusive.

—Se enuncia el artículo 24.

**Sr. Amelotti.** — Pido la palabra.

Estimaría que el señor miembro informante me aclare el procedimiento que se va a seguir en la aplicación del último párrafo de este artículo, que dice: «para los establecimientos que impartan enseñanza exclusivamente gratuita esta contribución del Estado podrá alcanzar hasta el 80 %». ¿Este 80 % se refiere a la suma con que se va a retribuir al profesor el sueldo mínimo que es de 275 pesos?

**Sr. Soler.** — El 80 % a que se refiere el artículo es sobre el 60 % de los sueldos mínimos que debe fijar el establecimiento adscripto.

**Sr. Amelotti.** — Porque si fuera sobre los 275 pesos, quiere decir que los profesores estarían retribuidos con 220 pesos.

**Sr. Soler.** — El establecimiento tiene que pagar el 60 %, pero si no tiene entradas, porque su enseñanza es gratuita, el Estado contribuye con el 80 % de ese 60 %.

**Sr. Tascheret.** — Y esos establecimientos ¿con qué viven?

**Sr. Soler.** — Viven de donaciones de filántropos, de colectas; algunos son colegios religiosos que tienen enseñanza gratuita para propaganda o estímulo de su parroquia.

**Sr. Tascheret.** — En esos casos, el Estado tendría que contribuir con el 100 por ciento.

**Sr. Soler.** — ¿Se da por satisfecho, señor senador por Córdoba?

**Sr. Amelotti.** — Sí, señor senador.

—Se vota y aprueba el artículo 24.

—Sin observación, se aprueba el resto del proyecto.

**Sr. Presidente (Teisaire).** — Queda aprobado. *(Aplausos prolongados en las galerías.)*

**Sr. Soler.** — Pido la palabra.

Antes de terminar, quiero dejar constancia del agradecimiento de las comisiones al señor profesor Jorge P. Arizaga, subsecretario de Instrucción Pública, y al personal técnico de la repartición, que con tanto entusiasmo y patriotismo han colaborado en la estructuración de esta ley.

Hago extensivo este agradecimiento y esta felicitación a la contribución que han prestado los señores ministros de Instrucción Pública y de Hacienda de la Nación. Si el señor ministro de Hacienda hubiera podido disponer de más recursos, estoy seguro de que hubiéramos podido ser mucho más generosos; por desgracia, se encuentra en la posición de no poder dar más, y por eso no hemos podido llegar al desiderátum del 100 %. Pero el espíritu del señor ministro de Hacienda era llegar al máximo que permitieran las finanzas de la Nación.

12

# CONSTRUCCION DE UN CAMINO DE HORMIGON ENTRE GENERAL MADARIAGA Y MAR DE AJÓ. — PROYECTO DE LEY DE LOS SENADORES TEISAIRE Y BUSQUET.

PROYECTO DE LEY

*El Senado y Cámara de Diputados, etc.*

Artículo 1º — El Poder Ejecutivo procederá a construir por intermedio de la Administración General de Vialidad Nacional, un camino de hormigón entre General Madariaga y Mar de Ajó, por La Tablada, provincia de Buenos Aires, a cuyo efecto se destina la suma de doce millones de pesos moneda nacional (\$ 12.000.000 moneda nacional).

Art. 2º — Queda autorizado el Poder Ejecutivo para emitir títulos hasta cubrir la suma determinada en el artículo anterior. El servicio de estos títulos se hará de rentas generales, con imputación a la presente ley.

Art. 3º — Comuníquese, etc.

*Alberto Teisaire. — Alfredo Busquet.*

## FUNDAMENTOS

Señor presidente:

Quien con criterio analítico observe la carta vial del país y lleve su examen hacia el Oriente del mismo, sobre la zona costera del litoral atlántico bonaerense precisamente la más inmediata a nuestro río de la Plata, ha de encontrarse sin duda con la gran anomalía resultante de que la magnífica zona de playa que desde el Cabo San Antonio se desarrolla en un curso de más de 100 kilómetros hacia el Sur hasta Punta Médanos, para torcer al S. W. en dirección a Mar del Plata, se encuentra prácticamente sin vinculación alguna con el resto del país, puesto que es inadmisibles el aceptar como vías de comunicación los pocos y pésimos caminos de tierra y arena, por los cuales ocasionalmente y tras de verdaderos sacrificios, es posible llegar a descubrir el espléndido mar que baña aquellas playas, que por su amplitud, suave declive, tranquilidad de sus templadas aguas, saturadas de yodo, reúnen condiciones tales que las hacen comparables con las mejores del mundo. Y además el océano que al llegar a ellas declina todos sus arrebatos, para recostarse mansamente en sus arenas, ofrece al hombre una riqueza ictiológica sin par, en una fuente de recursos económicos inagotable que desaprensivamente yace sin explotar precisamente en el lugar donde la pesca de las especies más nobles abunda en forma sorprendente. Y todo ese conjunto de bondades que generosamente brinda al país la naturaleza se halla como vedado al usufructo de su población, que prácticamente lo desconoce debido al hecho de que hasta el presente los poderes públicos no se hayan resuelto a salvar de una vez por todas los inconvenientes naturales que mantienen el aislamiento de esa región del Nordeste de la provincia.

Esta situación de abandono de esa faja de nuestro litoral y de la zona terrestre que aquel borde, constituida por los partidos de Lavalle, Conesa y Madariaga, ha dado lugar en más de una ocasión, en época de lluvias y en virtud de las bajas cotas de nivel y de